UNA MIRADA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO SOBRE LA VIOLENCIA[1]

La primera parte de este libro estuvo dedicada a la descripción y el análisis de la evolución reciente de los actores armados, sus acciones y su expansión territorial, tanto en el nivel nacional como en el regional. El análisis fue ejemplificado con los casos de la región de Urabá y del departamento del Putumayo. Además, se trabajó la historia comparada de las FARC y las AUC y se mostró que las interacciones estratégicas entre estos grupos producen, en el largo plazo, un importante grado de simetrías en sus acciones, a pesar de sus evidentes diferencias en el discurso. Se indicó también que la interacción y la expansión territorial en contravía están estrechamente relacionadas con los problemas surgidos en zonas de colonización campesina, especialmente en áreas vecinas en rápida expansión económica con tensiones que sobrepasan la capacidad reguladora de las instituciones estatales. Por esta vía se mostraba que la violencia política tiene algo que ver con los tipos de desarrollo agrario que se impulsan en esas regiones de frontera. El conjunto de relaciones que atan a los actores armados con ciertos contextos poblacionales y territoriales fue analizado desde la categoría de acción violenta. Tal categoría supone una combinación de dos tipos de enfoques, los que privilegian los llamados factores "objetivos" de la violencia y los centrados en los denominados factores "subjetivos". Desde ahí se propone una aproximación que sintetice los aportes logrados por el conjunto de investigadores, colombianos o extranjeros, que se han ocupado de esta problemática.

Esta segunda parte del libro trata de responder los interrogantes que la evolución histórica y geográfica de los actores en conflicto plantean sobre el tipo de Estado que se construye en Colombia. En efecto, la expansión territorial de los actores armadoss exige preguntarse por el estilo de presencia de las instituciones estatales en las diferentes regiones y por el tipo de conflictos que los diferentes actores armados tienen que enfrentar para lograr el control de esos distintos territorios. Por eso se busca aquí enmarcar la evolución reciente del conflicto armado y los cambios de las lógicas de sus actores en el

[1] Esta parte fue elaborada conjuntamente por Fernán González e Ingrid Bolívar, retomando trabajos previos de ambos, entre los que es posible distinguir la discusión más teórica sobre los problemas relacionados con la construcción del Estado, estuvo principalmente a cargo de Ingrid Bolívar, y la lectura del proceso histórico de largo, mediano y corto plazo fue elaborada en su mayor parte por Fernán González.

contexto de la historia política del país. Más puntualmente, se trata de leer el conflicto armado a la luz de la específica configuración del Estado y la sociedad de Colombia. Se quiere mostrar que la diferenciación regional del conflicto armado expresa modalidades concretas de ocupación territorial que a su vez se traducen en formas específicas de cohesión social y de articulación con el Estado. Más aún, se insiste en que el establecimiento de formas de ocupación y su articulación con los poderes establecidos es una dinámica constitutiva del proceso de formación del Estado como tal. Para mostrar eso, el texto combina la visión estructural e histórica de los escenarios donde se desarrolla el conflicto, tanto en la dimensión de la nación en su conjunto como en la dimensión regional, con el análisis de las lógicas de los actores sociales que voluntariamente optan por la violencia como única solución a los conflictos de la sociedad colombiana. Y, a partir de la evolución reciente de la presencia de los actores armados en las diversas regiones se intenta caracterizar el desarrollo del conflicto armado como un proceso inseparable de la configuración del Estado.

Para desarrollar esta perspectiva se utilizan las descripciones elaboradas en los capítulos anteriores sobre los escenarios geográficos del conflicto colombiano, la lógica de expansión territorial que conllevan y los modelos implícitos de desarrollo rural que suponen. Como se recordará tales descripciones dieron lugar a un conjunto de mapas elaborados por el Sistema de Información Georreferenciado (SIG) del CINEP. En un segundo momento se analizan las zonas en disputa detectadas en esos mapas a partir de las categorías de "territorialidades bélicas" y "soberanías en vilo", tomadas de María Teresa Uribe. Tales categorías recalcan la inexistencia del monopolio estatal de la fuerza y de la justicia en algunas regiones, al tiempo que llaman la atención sobre el papel de los actores armados en la configuración de "órdenes alternativos". Al lado de Uribe, Daniel Pecaut ha llamado la atención sobre el creciente uso que los actores armados hacen de "estrategias de terror", y con ellas los desafíos diferenciados que la actual violencia representa para el Estado colombiano y para la población civil. Después de una presentación detallada de los planteamientos de estos autores, se discute el sentido de la situación por ellos estudiada, a partir de la recuperación y el contraste entre lecturas de algunos autores que se han ocupado del vínculo entre Estado y violencia en Colombia. Así, se introduce una relectura de Paul Oquist, centrada en la interpretación de la violencia actual como un nuevo "colapso parcial del Estado" y una revisión de los planteamientos de Pécaut sobre la "precariedad del Estado" como marco de la violencia colombiana. Se muestra que los planteamientos de ambos autores pueden integrarse en una propuesta de interpretación que resalta la presencia diferenciada del Estado en diferentes momentos de nuestra historia y en diferentes regiones del territorio, a la que corresponde una acción igualmente diferenciada de los actores armados.

La revisión de estas lecturas introduce la necesidad de reflexionar sobre el carácter histórico del monopolio estatal de la fuerza. Así en un tercer momento, el texto se ocupa de mostrar que tal monopolio ha sido construído de distintas maneras en diferentes experiencias históricas. Se insiste en que este monopolio no es algo esencial a todos los Estados. Para desarrollar estos planteamietos se analizan sumariamente los procesos clásicos de formación del Estado-nación en Occidente, a partir de autores como Norbert Elias, Michael Mann, Georges Burdeau, Philip Abrams y Charles Tilly; para luego contrastarlos con los grandes momentos de la configuración política de Colombia.

En un cuarto momento se contrastan estos desarrollos con el análisis de la especificidad del proceso de configuración del Estado en Colombia. Para hacerlo se combinan las dinámicas de poblamiento que reflejan la integración territorial del país con los desarrollos de la articulación política de localidades y regiones al conjunto de la nación. Se considera que esas dinámicas y esos desarrollos son los

trasfondos de larga duración que constituyen las condiciones de posibilidad –las "estructuras de oportunidad"- de las opciones voluntarias de los actores armados. Esta lectura del desarrollo político colombiano se inicia con una visión de largo plazo de la historia republicana, en la que se mezclan la dinámica de ocupación territorial con los procesos de articulación política. Ambos reflejan el proceso de construcción del Estado. Luego se analizan las consecuencias que tiene este estilo particular de articulación política frente a los cambios de la sociedad colombiana a partir de los años sesenta: la creciente y rápida urbanización del país, junto con otros cambios socioculturales, ocasiona una profunda transformación de las dinámicas de representación política de los partidos tradicionales y del régimen político. Esta transformación, que suele caracterizarse como crisis se agrava aún más en las recientes décadas con la penetración del narcotráfico en la sociedad y la política del país, con la aparición de grupos paramilitares, con la expansión de la grupos de guerrilla y con las transformaciones del contexto internacional.

De las territorialidades bélicas a la presencia diferenciada del Estado

1

LOS ESCENARIOS DE LA VIOLENCIA

Como hemos observado en los capítulos de la primera parte, la geografía de la violencia no cubre homogéneamente ni con igual intensidad el territorio de Colombia. Por el contrario, la presencia de la confrontación armada es altamente diferenciada de acuerdo con la dinámica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social, como en su organización económica, su vinculación a la economía nacional y global y su relación con el Estado y el régimen político. Y, consiguientemente con esa dinámica regional, la geografía del conflicto está relacionada con la presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en los distintos territorios. Esta diferenciación del conflicto es producida parcialmente por condiciones geográficas y demográficas previamente dadas. Así por ejemplo, la cercanía de selvas y montañas, el territorio dividido por tres ramales de la cordillera de los Andes, cuyas vertientes y valles interandinos están cubiertos por bosques de niebla casi permanente, la cercanía de zonas de economía campesina de subsistencia, constituyen el escenario natural para el funcionamiento de la guerrilla.

Pero esas condiciones estructurales no determinan necesariamente una opción de los actores y grupos sociales por la violencia, como se ha visto en la discusión sobre las explicaciones basada en los aspectos objetivos y subjetivos de la violencia y en la consiguiente propuesta de interpretación a partir de la categoría de "acción colectiva violenta". En este sentido, se indica que tal acción es el producto de la elección voluntaria de grupos de carácter mesiánico y jacobino que deciden, en una circunstancia histórica determinada, que tomar las armas es la única salida posible para los problemas de la sociedad. Ahora bien, la diferenciación espacial y temporal de las violencias y la presencia diferenciada del Estado en las regiones y circunstancias están relacionadas con el hecho de que las violencias colombianas no giran en torno a una sola polarización entre amigos y enemigos claramente definidos, ni en torno a un eje específico de conflictos (económico, étnico, religioso, nacional, etc.), sino que sus contradicciones se producen en torno a varias dinámicas de distinto orden y a procesos históricos diferentes, que se reflejan en identidades más cambiantes y en cambios en el control de los territorios.

El carácter diferenciado del conflicto, que se mueve en distintas dimensiones espaciales y en distintos momentos, hace que sea posible, como se ha visto atrás, identificar, a partir de los mapas elaborados por el Cinep[2], *zonas en disputa*, caracterizadas por un número creciente de enfrentamientos bélicos entre los actores armados y un volumen igualmente creciente de violaciones del Derecho Internacional Humanitario. En esas zonas en disputa se pueden diferenciar, como se mostró en el capítulo anterior, varias dinámicas geográficas del conflicto armado[3]: una macrorregional, una intermedia y una de carácter microrregional, aunque a menudo ellas puedan entremezclarse y reforzarse mutuamente.

Territorialidades bélicas y soberanías en vilo

Las zonas en disputa han sido caracterizadas por María Teresa Uribe a partir del concepto de *estados de guerra*, una vieja idea hobbesiana que ha sido retomada más recientemente por Michel Foucault. Estos estados de guerra son descritos como situaciones o porciones del territorio donde el poder institucional no es soberano y donde prevalece en sectores amplios de la población "la voluntad manifiesta de no someterse al orden estatal y de resistirse a su dominio y control, manteniendo abierta la posibilidad de confrontarlo y combatirlo con las armas en la mano, así como de agrupar a los sujetos sociales de su entorno en bandos capaces de matar o morir"[4]. Los *estados de guerra* se caracterizan por el *animus belli*, o sea "el mantenimiento de la hostilidad como horizonte abierto para dirimir las tensiones y los conflictos del mundo social y la violencia como estrategia para la solución de la vida en común"[5]. En esos estados de guerra coexisten "regiones y territorios relativamente pacíficos" al lado de "espacios particularmente violentos", lo mismo que coyunturas de agudización de las violencias junto con periodos de baja intensidad, y enfrentamientos bélicos directos con violencias múltiples y difusas[6].

Obviamente, señala la autora, el correlato de estos estados de guerra prolongados en el tiempo es "la fragilidad de la soberanía estatal": el pueblo de la nación no ha sido desarmado ni pacificado del todo, ni por la vía del consenso ni por la de la violencia, sino que predomina en algunos sectores la voluntad de disputar con las armas el dominio y el control del Estado. No existe entonces la autoridad necesaria para garantizar razonablemente "la vigencia del orden constitucional y legal". Además, la fragilidad de los procesos de integración social en el campo de los derechos hace difícil "la formación de la conciencia nacional, que es condición para que el Estado moderno llegue a ser soberano y legítimo". Como resultado de todo eso, "la soberanía interna permanece en *vilo*, en disputa, situación que se manifiesta en la conformación de la Nación, expresándose en ámbitos tan importantes como el territorio, la comunidad imaginada y la formación de las burocracias"[7].

2 Sistema de Información Georreferenciada (SIG), 2001. "Dinámica del conflicto armado, 1999-2000", CINEP, Bogotá.

3 Teófilo Vásquez, 1999. "Un ensayo interpretativo sobre la violencia de los actores armados en Colombia", en: *Controversia* No. 175, CINEP, Bogotá, diciembre de 1999, y 2001. "Análisis cuantitativo y cualitativo de la violencia de los actores armados en Colombia en la década de los 90", en: *Informe final. Evolución reciente de los actores de la guerra en Colombia, cambios en la naturaleza del conflicto armado y sus implicaciones para el Estado*, proyecto de investigación realizado por el CINEP con el apoyo de Colciencias y la AID, Bogotá, marzo de 2001.

4 María Teresa Uribe, 2001. "Las soberanías en disputa: ¿conflicto de identidades o de derechos?", en: María Teresa Uribe, *Nación, ciudadano y soberano*, Corporación Región, Medellín, 2001, p.251.

5 *Ibídem*, p.252.

6 *Ibídem*.

7 *Ibídem*, pp. 252-253.

Como consecuencia de estas soberanías en vilo, la ciudadanía se vuelve virtual y los derechos de los ciudadanos se tornan precarios y vulnerables, ya que las normas y leyes del Estado operan solo de manera restringida como referentes para la acción pública de los sujetos. En esa situación, como en el "dilema del prisionero", la opción más racional es la de actuar como "*free rider*"[8]: "El ciudadano corriente sabe que no puede esperar que la autoridad actúe de manera eficiente y de acuerdo con la ley si algún derecho le es violado o es víctima de algún delito. Librado a sus propias fuerzas, el ciudadano tomará decisiones privadas y pragmáticas buscando la justicia por mano propia o la protección de algún poder armado que le ofrezca una seguridad precaria y transitoria pero que valora como más eficiente y expedita. En suma, actúa de acuerdo con los órdenes alternativos de hecho y no con referencia a la ley o al orden institucional"[9].

Esas territorialidades bélicas surgen con una clara connotación de estrategia militar por parte de los movimientos guerrilleros, especialmente en su momento fundacional. En su mayor parte, sostiene María Teresa Uribe, corresponden a "territorios de refugio y resistencia donde la presencia institucional era virtual", cuyos pobladores manifestaban ciertas "distancias, reticencias o francas hostilidades con el poder institucional", pues, o lo habían combatido, o querían evadir su control, o se sentían desplazados por él de su sitio de origen. En esos territorios se desarrolla la acción guerrillera, cuyo sentido original era "la autoprotección de sus efectivos, la movilidad en el territorio y la consecución de abastecimientos y de recursos económicos". En ese momento fundacional sus relaciones con la población civil no eran conflictivas sino que frecuentemente contaban con su apoyo y reconocimiento, talvez por "el hecho de compartir una suerte común de refugio y hostilidad hacia el orden institucional", que los llevaba a veces a forjar identidades comunes "surgidas de una visión compartida de rebeldía y victimismo", pero esto no implicaba necesariamente "alguna forma de consenso explícito" respecto del proyecto político militar de los grupos guerrilleros[10].

La acción insurgente fue definiendo un mapa político, con fuertes fronteras simbólicas que, definían un adentro y un afuera, a partir de los desplazamientos de los grupos armados, los núcleos poblados donde se abastecían y las áreas que servían de refugio y descanso, de reclusión para secuestrados o de almacenamiento de armas[11]. Obviamente, las territorialidades bélicas así determinadas se superponían al modelo institucional de ordenamiento territorial, que quedaba así desvertebrado y dislocado:

> *"...las territorialidades bélicas tomaban espacios veredales de varios municipios vecinos y, con frecuencia, áreas menores de departamentos contiguos, conectados entre sí por accidentes geográficos: valles y cañones de ríos, páramos de difícil acceso, crestas de las cordilleras fueron integradas a estos territorios a través de una red intrincada de trochas y de caminos de herradura que les permitía desplazarse, de un municipio a otro o entre varios departamentos".*

Además, señala la autora, la configuración de estas territorialidades también tiene que ver con las respuestas estatales a los desafíos planteados por la insurgencia. Desde la administración, esas regiones fueron

8 Las ventajas del recurso a estrategias individuales de supervivencia han sido señaladas por Daniel Pécaut en su artículo "De la violencia banalizada al terror", en: *Controversia* No. 171, CINEP; Bogotá, diciembre de 1997, reproducido posteriormente en el libro *Guerra contra la sociedad*, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 2001.

9 María Teresa Uribe, 2001. o. c, p. 256.

10 María Teresa Uribe, 2001. o. c., pp. 257-258.

11 *Ibidem*, p. 258.

señaladas como conflictivas o rebeldes, a veces para desatar operaciones militares de contrainsurgencia, y a veces para impulsar procesos acelerados de inversión pública, que se pensaban como remedios frente a las llamadas causas objetivas de la violencia. Ambas lógicas señalaban a estos territorios como "distintos, signados por la guerra, diferentes y hostiles que ameritaban un tratamiento especial y diferencial". Esta diferenciación espacial por el conflicto creaba o reforzaba "sentidos de pertenencia y diferencia", lo que daba lugar al surgimiento de identidades que tenían poco que ver con problemas políticos o identidades culturales previas, pero mucho "con el hecho de compartir una historia común y de habitar un territorio formado, nombrado y pensado desde la guerra"[12].

La insistencia en que el conflicto armado incide en la diferenciación espacial y política de los territorios es desarrollada también por Clara Inés García[13], quien muestra cómo los conflictos y la respuesta estatal a ellos dan lugar a la conformación del espacio conocido como el bajo Cauca antioqueño. Más recientemente, María Clemencia Ramírez ha llamado la atención sobre la manera como las políticas desarrolladas por el gobierno nacional para hacer frente a la expansión de los cultivos ilícitos y los problemas de orden público en el suroriente del país han dinamizado la constitución de identidades regionales e incluso de un movimiento social de "cocaleros". La misma autora señala como paradójico el hecho de que parte de los habitantes del sur del país hayan recibido atención por parte del gobierno nacional "gracias" a la expansión de un cultivo ilícito y a la presencia de las FARC. La existencia de las "territorialidades bélicas", así como la importancia de la política estatal en la diferenciación de los espacios sociales, han puesto de presente la necesidad de revisar las formas predominantes de comprensión sobre el vínculo entre el Estado y el conflicto armado en Colombia. En este sentido deben trabajarse los señalamientos anteriores referidos a la "diferenciación espacial y política" promovida por el desarrollo del conflicto armado interno[14].

¿Órdenes alternativos o "protoestados"?

La diferenciación espacial y política promovida por la violencia se expresa también en lo que María Teresa Uribe ha llamado "órdenes alternativos de hecho". En efecto, en las territorialidades donde actúan los grupos guerrilleros proporcionan cierto orden interno y tratan de construir consensos y algunas formas embrionarias de representación. El cobro forzoso de "impuestos" (la famosa ley 002 de las FARC) permite financiar su expansión militar, controlar el excedente económico de los territorios controlados, hacer presencia esporádica en zonas aledañas o distantes, y mostrar que tienen suficiente poder coercitivo para forzar a los particulares a pagar, a la vez que demostrar al Estado que no es soberano en esos territorios.

Las organizaciones insurgentes van configurando un orden interno predecible, sobre todo en las zonas de colonización, que sirve de eje integrador de poblaciones residentes en ellas o que llegan a ella de manera aluvional, así sean de diferente origen étnico o regional. Logran así cierto reconocimiento para dirimir tanto conflictos entre vecinos como tensiones domésticas, controlar la delincuencia menor, distribuir terrenos baldíos, organizar la población en el territorio, definir derechos de posesión y explotación de los recursos, establecer cierto control de precios a los abastecimientos y a los salarios y organi-

12 *Ibídem*, pp.259-260.

13 Clara Inés García, 1993. *El Bajo Cauca antioqueño. Cómo ver las regiones*, CINEP, Bogotá, e INER, Universidad de Antioquia, Medellín.

14 María Clemencia Ramírez, 2001. "Los movimientos cívicos como movimientos sociales en el Putumayo: el poder visible de la sociedad civil y la construcción de una nueva ciudadanía" en: Mauricio Archila y Mauricio Pardo (editores), 2001. *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*, CES, Universidad Nacional e ICANH, Bogotá.

zar, con los pobladores, la realización de obras públicas de interés común, como caminos, puentes o escuelas. En ese sentido, señala esta autora, en algunas poblaciones han cumplido "el rol de fundadores", con el consiguiente significado que este papel conlleva "en el horizonte de las identidades locales y las memorias colectivas". Y subraya que estos rasgos son semejantes a los viejos patronazgos, pero ahora dentro de un contexto diferente, signado por la guerra, pero que, sin embargo, cumplen también "con *la función semiestatal de ofrecer protección, orden y seguridad a cambio de lealtad incondicional y obediencia absoluta*"[15].



En una dirección similar se orientan algunos planteamientos de Mario Aguilera, cuyo estudio de la justicia guerrillera analiza las diversas formas como los grupos guerrilleros participan de la producción de orden y seguridad en los territorios que controlan. Desde la perspectiva de este autor, la justicia administrada por los grupos guerrilleros se caracteriza por ser esencialmente instrumental[17]. En palabras de Aguilera, "su justicia" constituye un instrumento de guerra: de un lado, porque funciona para enfrentar o suprimir al enemigo político, y de otro, porque intenta construir, por lo menos parcialmente, órdenes o poderes políticos locales mediante el uso de un rigorismo penal desproporcionado en relación con los "delitos" o problemas que se pretenden resolver"[17]. Este mismo autor distingue entre tres tipos de justicia guerrillera: la justicia ejemplarizante, la justicia de retaliación y la justicia del poder local. Ellos dependen, por un lado, de las demandas de la sociedad local que se quiere controlar y, por el otro, de las condiciones de la expansión del grupo guerrillero en cuestión. Así por ejemplo, "la actual forma predominante de justicia guerrillera, (la justicia del poder local), surge articulada a los conflictos o movimientos locales o regionales, o se engarza a ciertos cambios institucionales relacionados con la democracia local. Al mismo tiempo la justicia para el poder local es también consecuencia de la reciente territorialidad de la guerra. La oferta de seguridad y de una justicia rápida, barata y eficiente, es un importante elemento para el control permanente de los territorios"[18]. En cambio, la justicia ejemplarizante y la de retaliación corresponden a momentos distintos de la expansión de los grupos guerrilleros: la primera se daba cuando enfrentaban las demandas de orientación por parte de una sociedad de reciente establecimiento, y la segunda, cuando intentaban articularse con los movimientos sociales regionales. Desde la perspectiva de Aguilera es necesario ligar la pregunta por la justicia guerrillera con la estrategia política de esos actores, ya que entre la justicia guerrillera y la estatal existen rivalidades pero también importantes complementariedades.

Esta constatación de la implantación de principios más o menos predecibles de orden y organización interna por parte de los grupos guerrilleros, que se expresan en normas explícitas e implícitas aceptadas voluntaria o forzosamente por los pobladores, le permite a Maria Teresa Uribe hablar de estas dinámicas como "*un embrión de Estado*"[19]. Este *"embrión"* presenta algunas analogías con el sistema de patronazgo y clientela que surge en la consolidación de los poderes locales que tradicionalmente se ligaban al Estado y la nación por la vía de los partidos tradicionales, pero con una diferencia fundamental: aquí no se presenta esta articulación bipartidista con el Estado y la nación, sino que se da una ruptura con éste y aquella.

15 María Teresa Uribe, 2001. o. c, pp. 260-261.

16 Mario Aguilera, 2001. "Justicia guerrillera y población civil, 1964-1999", en: *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*, Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García, Tomo II, Colciencias, ICANH, Universidad de Los Andes, Siglo del Hombre editores y Universidad de Coimbra, p.393.

17 Mario Aguilera, 2001. o. c., p.393.

18 Mario Aguilera, 2001. o. c., p.422.

19 María Teresa Uribe, 2001. o.c.

En efecto, tanto Pécaut como María Teresa Uribe llaman la atención sobre la forma como la modalidad de territorialización impuesta por la coacción de los actores armados reedita dinámicas usadas tradicionalmente por los partidos políticos. Estas importantes continuidades entre la forma de operar de los tradicionales partidos políticos y algunas prácticas de los grupos guerrilleros hacen que Pécaut señale que no es sorprendente que los habitantes de las zonas de colonización acepten como fenómeno "normal" la coacción ligada a la territorialización, al ser considerada como "una modalidad ineluctable de integración a la nación"[20]. Estas semejanzas pueden ser ilustradas también con la comparación con el caso de Trujillo, en el Valle del Cauca, analizado por Adolfo Atehortúa[21] y el caso del Meta, donde los líderes regionales se apoyaron en antiguos jefes guerrilleros de la Violencia de los cincuenta. Esas similitudes le permiten a Pécaut afirmar que la guerrilla aparece en esas zonas como "clase política alternativa".

Además, señala María Teresa Uribe, estos poderes alternativos poseen cierto "componente de consenso que les otorga reconocimiento y alguna forma de representación de intereses", aunque se sustenten primordialmente en un poder armado, "autoritario y discrecional", que no deja mucho espacio para la autonomía en las decisiones individuales y cuyo desacato es castigado con la vida o el destierro. Pero ese componente de consenso no tiene, dice la autora, un sentido político ni la adhesión a un proyecto de Estado, nación, o modelo de desarrollo, sino que obedece más bien "a un sentir moral tejido sobre la experiencia de la exclusión y el refugio, sobre las heridas dejadas por la ausencia de reconocimiento y por la desigualdad social, y quizá también, sobre una noción difusa de justicia, más cercana a la venganza". Esta noción vaga de justicia legitima de algún modo "el accionar violento de los armados como manera de establecer el equilibrio social roto por otras violencias anteriores". Además, ese consenso precario se basa también "en las tramas sociales que establecen los grupos armados con los pobladores de los territorios bélicos, pues éstas son las zonas privilegiadas para el reclutamiento de efectivos": los vecinos conocen a los actores armados desde su infancia, tienen con ellos lazos de sangre y parentesco; se presentan con frecuencia casos de dos o tres generaciones de una familia que han vivido bajo su poder. Por otra parte, con frecuencia las acciones de contrainsurgencia refuerzan esas identificaciones cuando tratan a los pobladores como enemigos y sus prácticas se asemejan más a las de un ejército de ocupación en territorio enemigo[22].

Esta cierta especie de consenso produce, consiguientemente, alguna forma de representación de los intereses y demandas locales y regionales, que no se basa en ningún procedimiento democrático, ni está mediada por ninguna forma de consulta, sino que surge a partir del hecho de que se presupone que la población está identificada con ellos. A nombre de esta representación autorreferida, sin elección, establecen relaciones con los poderes locales, los funcionarios públicos, las organizaciones sociales y los particulares, a la manera del patronazgo tradicional. Así, "esta forma embrionaria de representación-intermediación" permite a los grupos insurgentes y sus milicias urbanas desarrollar micronegociaciones semiprivadas para reorientar, de manera más o menos forzada, "los proyectos de desarrollo local, las inversiones públicas, la gestión de los alcaldes, las determinaciones de los concejales, las solicitudes de las organizaciones comunales y de las organizaciones sociales"[23]. En ese mismo sentido, los grupos guerrilleros suelen promover en importantes regiones la afiliación a las juntas de acción comunal, que son, como tales, organizaciones legales y favorecidas por la legislación estatal. En esa dirección Pecaut señala que los "jueces,

[20] Daniel Pecaut, 2001. o. c, pp.235-237.

[21] Adolfo Atehortúa, 1995. *El poder y la sangre. Las historias de Trujillo (Valle)*, CINEP, Bogotá, y Universidad Javeriana, Cali.

[22] María Teresa Uribe, 2001. o. c, pp. 262-263.

[23] María Teresa Uribe, 2001, o. c., p.263.

los policías, los alcaldes y los concejales municipales se vuelven partícipes de las interacciones que van definiendo las reglas de hecho de los juegos locales. Tienen que formar parte de las redes organizacionales prevalecientes, luchar por la apropiación del poder, negociar con los protagonistas de la violencia. Nada más lejos de la institucionalidad democrática"[24].

Los grupos guerrilleros ejercen cierta vigilancia sobre la administración pública de los municipios: juzgan y castigan a los que consideran corruptos. Y, en ese mismo estilo imponen acuerdos a las empresas legales o ilegales que operan en el territorio, tanto para la inversión social en él como para la vinculación laboral de los pobladores que les den garantías o la desvinculación de los que no sean de su confianza. Su estilo de patronazgo también logra incidir en las instancias gubernamentales para el otorgamiento de viviendas, la legalización de barrios de invasión, la comercialización de productos agrícolas[25]. Por otra parte, de manera indirecta, la simple presencia de la guerrilla permite que los grupos sociales de esas regiones, aunque no tengan vinculación orgánica con ella, incrementen sus márgenes de maniobra para negociar con los poderes públicos y los empresarios[26].

Así por ejemplo, María Clemencia Ramírez muestra que el movimiento de cocaleros del Putumayo en 1996 logró importantes resultados en la negociación con los funcionarios nacionales a propósito de la erradicación de cultivos. Desde la perspectiva de esta autora, los cocaleros ejercieron la llamada "política de la reforma" y lograron influir sobre la comprensión estatal del problema de los cultivos. Para ello utilizaron tanto la presencia de la guerrilla en la zona, como los conflictos entre los agentes estatales de los diversos niveles territoriales[27]. En ese trabajo, Ramírez señala también la creciente imbricación de los actores armados con los distintos agentes del Estado al analizar los numerosos conflictos que tienen lugar entre los funcionarios delegados del nivel central para las negociaciones con los campesinos cultivadores de coca, y los funcionarios públicos locales. La autora muestra que "frente a las presiones políticas nacionales e internacionales los funcionarios oficiales respondían de manera diferente y hubo conflictos entre los miembros de la comisión del gobierno central y entre ellos y los funcionarios regionales y locales; aún más, entre el gobernador y los funcionarios locales". Por esa vía se puso en evidencia la fragmentación del Estado y su carácter no monolítico.

Ahora bien, la existencia de conflictos permanentes entre los distintos agentes y aparatos del Estado no es una particularidad del caso colombiano. Pero lo que resulta interesante es la intensidad de estos conflictos en las zonas de disputa, donde cada una de las partes en conflicto, incluida la población civil, debe jugar en un escenario de alianzas conflictivas. Ramírez lo expresa adecuadamente. "El dilema de los habitantes de Putumayo sigue siendo cómo sostener una representación como grupo social y político diferenciado y, más aún, como lograr la apropiación de los espacios democráticos propiciados por el Estado y el compromiso del mismo, en una región donde diversos actores armados cumplen un papel preponderante y el gobierno no ha mostrado voluntad política para apoyar las iniciativas de los campesinos y así abordar de manera estructural el problema de la Amazonía y del cultivo de coca"[28].

[24] Daniel Pecaut, 2001, o. c., p. 266.

[25] Daniel Pecaut, 2001, o. c., p. 266.

[26] María Teresa Uribe, 2001. o. c, pp. 262-263.

[27] María Clemencia Ramírez, 2001. *Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*, ICANH, Bogotá, p. 228

[28] María Clemencia Ramírez, 2001. *Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*, ICANH, Bogotá, p.256.

Esta creciente y ambigua imbricación entre actores armados y autoridades locales recuerda la dominación clientelista de los gamonales locales adscritos a los partidos tradicionales. Lo que plantea un interesante problema para el funcionamiento de las agencias del Estado central en los territorios donde los actores armados juegan un importante papel como red local de poder al lograr dinamizar los conflictos entre las autoridades centrales y los funcionarios locales. El problema clásico de la formación del Estado frente a los poderes locales y regionales de hecho -"el dilema de los intermediarios"- se ve acentuado en este caso porque los eventuales intermediarios del Estado en las regiones son amenazados, cooptados o instrumentalizados por los actores armados que quieren expandir su control. O, en algunos casos, tales intermediarios pueden apelar a los actores armados como sus defensores contra los controles del Estado central.

Para precisar mejor los problemas asociados al establecimiento de la guerrilla como clase política resulta pertinente recordar algunos hallazgos de Wickham- Crowley sobre el auge y el declive de los gobiernos guerrilleros en América Latina. Este investigador muestra que el apoyo campesino a las guerrillas no se explica suficientemente por "el terror o el surgimiento de la conciencia", sino que retoma los planteamientos de Barrington Moore para mostrar que el apoyo campesino a las guerrillas se deriva "del establecimiento de un modelo asimétrico de intercambio entre ellos"[29]. Las guerrillas comienzan como una "autoridad muy informal, pero muy real". En ese sentido, puede decirse que las guerrillas construyen un dominio directo sobre la población local, que pasa por el establecimiento de funciones de policía y administración que los campesinos respaldan o por lo menos acatan, porque también les permite el acceso a la tierra y cierta defensa de sus propios derechos.

El predominio de este modelo de intercambio entre la guerrilla y los campesinos y la aceptación campesina del control guerrillero, a veces demasiado autoritario, se explica porque cada uno necesita o desea lo que el otro le puede ofrecer. Las guerrillas necesitan mover una población, construir un capital político, los campesinos quieren tierra y una defensa de sus recientes apropiaciones. En su explicación de este modelo de intercambio Wickham-Crowley sostiene que "la conversión (de los campesinos) a la ideología marxista (si) se produce alguna vez, llega después de la afiliación (del campesino a la guerrilla), rara vez antes"[30] Ahora bien insistir en un modelo de intercambio entre guerrillas y campesinos implica problematizar la dicotomía clásica entre identidad e interés. La identidad no se refiere solamente a un "sentido" desprovisto de materialidad y al mismo tiempo, el interés no se desprende mecanicamente de un cálculo sobre los recursos. Este punto exige recordar la insistencia de Bourdieu sobre la necesidad de superar una visión "fisicalista del mundo social que concibe las relaciones sociales como relaciones de fuerza física, y una visión "cibernética" o semiológica que las convierte en relaciones de fuerza simbólica, en relaciones de sentido, en relaciones de comunicación". Bourdieu recalca que "las relaciones de fuerza más brutales son al mismo tiempo relaciones simbólicas y los actos de sumisión, de

[29] Wickham-Crowley reseña distintos planteamientos de Barrington Moore y especialmente la distinción entre "autoridad predatoria" centrada exclusivamente en la coerción y "autoridad racional", que da mayor importancia al consentimiento popular. La autoridad, sin importar si es formal o informal, reposa en la inestable y conflictiva combinación de coerción e intercambio. Tal intercambio suele y puede ser asimétrico, pero el punto fundamental de la discusión está puesto en la regularidad de las dinámicas que vinculan a las "autoridades" y a las poblaciones sometidas. Algunas de las obligaciones de las autoridades son: la defensa contra los enemigos exteriores, el mantenimiento del orden y la paz interna, y la contribución a la prosperidad. A cambio, y por eso se trata de un intercambio, las poblaciones se someten a rutinas de control, pago de excedentes, obediencia... Véase Timothy Wickham-Crowley, 1995. "Auge y declive de los gobiernos de guerrilla en América Latina" en: *América Latina hoy*, 2da. época No. 10, junio 1995, pp. 8 y ss.

[30] Timothy Wickham-Crowley, 1995. o. c, pp. 11 y 19, respectivamente.

obediencia, son actos cognitivos..."[31]. Para los própositos de este texto, el planteamiento de Bourdieu es de gran relevancia pues evita que se reediten discusiones sobre el carácter instrumental o ideológico con el que los grupos poblacionales se vinculan a los actores armados. Más que discutir, políticamente, de qué tipo de vinculación se trata, el autor abre la puerta para que se entienda que los actores se configuran en una interacción social estructurada históricamente. Así, en el modelo de intercambio estudiado por Wickham-Crowley, queda claro que el apoyo de los campesinos a la guerrilla no se da ni por coacción, ni por convencimiento ideológico, ni por compartir el "sentido" de la acción. Tal apoyo y tal pacto se construyen a partir del hecho mismo de que comparten un territorio y, una vez ahí, la interacción social genera sus propios recursos. Además y como todo pacto, el modelo de intercambio entre guerrillas y campesinos puede declinar. Wickham recuerda que las guerrillas en América Latina cuentan con públicos interesados en aquellas zonas, "medios rurales en los que el poder se ejerce cada vez más por la pura coerción (autoridad predatoria) más que por el intercambio explícito entre campesinos y autoridades"[32]. Y, concluye recordando que, en América Latina, la consolidación de un gobierno guerrillero en el nivel regional ha dependido fundamentalmente de las condiciones regionales, por lo que no constituye una garantía de éxito en el nivel nacional[33].

La insistencia del autor en el papel del intercambio entre guerrillas y campesinos y en la existencia previa de una autoridad predatoria resulta pertinente pues varios analistas han llamado la atención sobre las dificultades que enfrentan las guerrillas para extenderse a zonas campesinas más o menos organizadas. Al respecto, Pecaut recuerda que "donde la guerrilla ejerce un control sobre la población sin que él mismo esté relacionado con beneficios económicos individuales o colectivos, le es más difícil que se reconozcan su poder y normas; las exacciones son entonces muy mal recibidas"[34]. Esta situación es ilustrada por el caso de Puerto Boyacá, lo que demuestra que el caso de la mediación que hacen las FARC de los intereses de los campesinos cocaleros es paradigmático, pero no generalizable. Por eso, es preciso insistir en que las modalidades del control varían según las regiones y los momentos que afrontan sus respectivas poblaciones. El caso más estudiado es el de las zonas de narcocultivo, que inspira parcialmente los análisis de María Teresa Uribe, antes citados: el papel de las FARC como protectoras de los colonos e instauradoras de cierto orden local justificaba su cobro de impuestos, y la aceptación de los colonos de ese orden y esos impuestos podría explicarse en términos de cálculo racional, como muestra Pécaut, que a su vez previene sobre la necesidad de "no subestimar la parte coactiva y los riesgos de desgaste de la autoridad de la guerrilla".

Ahora bien, este tipo de utilización de la presencia de los grupos guerrilleros y el conjunto de sus actividades puede resultar contraproducente porque genera la reacción de propietarios y en general de grupos poblacionales que pueden optar por financiar a paramilitares. Además, la ampliación de estas prácticas a sectores medios y bajos produce una mayor deslegitimación de los propósitos políticos de la guerrilla en el seno de la opinión pública nacional, que tiende cada vez más a asimilarlos a la delincuencia común[35]. Además, la misma consolidación de la guerrilla como red alternativa de poder puede terminar por desgas-

31 Bourdieu, Pierre, 1997. "Espíritus de Estàdo. Genésis y estructura del campo burocrático", en: *Razones Prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Anagrama, Barcelona, p. 115.

32 Timothy Wickham-Crowley, 1995. p. 19.

33 Timothy Wickham-Crowley, 1995. p. 19.

34 Daniel Pécaut, 1999. "Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano", en: *Revista Colombiana de antropología*, vol 35, p. 16 y ss.

35 María Teresa Uribe, 2001. o.c., pp. 260-261.

tar su propia autoridad, lo mismo que su capacidad para canalizar descontentos. En una investigación reciente José Jairo González ha encontrado que el crecimiento militar de las FARC revela también las limitaciones de su propuesta política y los conflictos característicos de lo que podría ser una "guerrilla de bienestar"[36]. Así, el mismo investigador reseña el "malestar" de distintos alcaldes de los municipios aledaños a la zona de distensión, porque las FARC no les había informado sobre sus planes para la región en el marco de las negociaciones de paz, a pesar de que sus zonas son consideradas "refugio histórico" de ese grupo armado. De ahí que se hayan propuesto fundar la asociación de municipios aledaños a la zona de distensión para tramitar recursos[37].

Incluso el que la guerrilla se reclame como única forma de oposición política, la convierte a veces en representante de los intereses de los colonos frente al gobierno central, en su protectora contra las exacciones de los narcotraficantes o del ejército y en su respaldo frente a los problemas con indígenas y negros. Al respecto resulta reveladora la carta de unos indígenas U'wa, en Chitagá, Norte de Santander, que se quejaban ante el comandante del frente Efraín Pabón Pabón del ELN, de que los guerrilleros, "en vez de ser imparciales" en un conflicto sobre unas mulas, "se pusieron del lado de los colonos" y fueron a la comunidad indígena solo a "humillarlos". Los indígenas recuerdan en su carta que el comandante guerrillero aseguró que sus funciones allí eran "mantener el orden" y no "administrar justicia"[38].

Esta continuidad entre los comportamientos de la guerrilla y los gamonales tradicionales sorprende a Andrés Peñate, cuando se encuentra con el "clientelismo armado" del ELN en el Arauca[39]. Este autor analiza el dinamismo de la vida política local en ese departamento. Dinamismo que se expresa en las tensiones entre grupos políticos rivales que instrumentalizan a los actores armados y en las rivalidades entre grupos guerrilleros, cuyas formas de relación con la población son muy diferenciadas. Este complejo juego de facciones y grupos armados se modifica con los cambios asociados a la explotación del petróleo, que trastocan el comportamiento de los actores armados y su relación con la política. En su análisis de la situación, Peñate concluye que "ve muy difícil que el ELN se erija en opción de poder si copia los hábitos y prácticas por los que el grueso de la población desprecia y critica a la clase política". Según él, "por el camino del clientelismo local no se derrota a la oligarquía nacional, cualquier cosa que eso sea, sino que quien lo pretende se convierte en oligarquía local o en su sirviente, cosa que está ocurriendo en varias partes del país"[40].

Estas aseveraciones, tan pertinentes de Peñate, nos llevarían a pensar en la manera diferenciada como los grupos armados se insertan en las dinámicas propias de las sociedades regionales, y más precisamente, en el tipo de relaciones que existe entre tales sociedades y sus "representantes políticos". Desde la perspectiva de este texto no se trata de que el grupo armado "copie" de manera voluntaria las prácticas clientelistas tradicionales. Como muestra el mismpo Peñate, los actores armados se ven abocados a asumir formas de relación política que aseguren una permanente interacción con los pobladores y con aquello que resulte

[36] José Jairo González, 2000. "El protoestado o los límites de la acción colectiva", Informe de investigación, CINEP, Mimeo, diciembre 2000.

[37] Conversación personal con José Jairo González. Un recorrido sobre las distintas etapas de actual proceso de paz puede leerse en su informe de investigación, antes citado.

[38] Fotocopia de la queja de los indígenas de La Mulera, Chitagá, Norte de Santander ante el ELN en 1998.

[39] Andrés Peñate, 1999. "El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado", en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente, 1999. *Reconocer la guerra para construir la Paz,* CEREC, Uniandes, Editorial Norma, Bogotá.

[40] Andrés, Peñate, 1999. *Ibídem.*

significativo en el mundo local. No se trata de que los actores armados copien prácticas, sino de la manera como se establece la relación con los pobladores locales. Como observa el mismo Peñate, el ELN quería diferenciarse de las FARC, por lo que se negaba a participar en elecciones y a establecer vínculos con la población de los colonos que llegaba al Sarare. Pero, el desarrollo mismo del conflicto armado les iba a mostrar que "la lucha guerrillera no se da solo en lo militar, sino también en la política local (y que) el apoyo de la población es muy difícil de conseguir si la estructura armada no toma partido a favor de movimientos políticos locales"[41].

En sentido similar al de Peñate, Palacios ha señalado esta "asimilación" del clientelismo como muestra de "la versatilidad guerrillera", cuya evidencia encuentra en el caso de Urabá donde la rivalidad política entre guerrillas y otros movimientos políticos se resolvía por medio del intercambio de los votos por lotes-vivienda[42]. Los planteamientos de Peñate sobre la continuidad entre la adscripción política tradicional a los partidos y la adscripción y el tipo de prácticas políticas que propician los actores armados son recogidos por Pécaut, que concluye que tanto los partidos como los actores armados pueden ser leídos como redes de poder, que se diferenciarían "por el uso abierto y sin reserva del terror"[43]. Rangel comparte estos señalamientos, al señalar que la guerrilla se ha convertido a la vez en factor de corrupción de las administraciones locales y de explotación de viejos problemas del Estado colombiano[44].

La insistencia en la continuidad de las prácticas políticas de los partidos y de los actores armados recalca la relación de esos comportamientos con el tipo de sociedad que respalda tales prácticas, provengan del sector que provengan. Hay que pensar cuáles son los vínculos sociales que se reconocen en esa multiplicidad de fenómenos que se expresan como "clientelismo", en este caso "clientelismo armado" o como "corrupción". No porque no lo sean, sino porque tras ellos se esconden dinámicas políticas que hay que reconsiderar. Así por ejemplo, Palacios llama la atención sobre el hecho de que la guerrilla se apoya "en redes clientelares adecuadas a la jerarquización empírica de la sociedad rural (...) y que en muchos de estos casos la familia es la unidad política básica y no el individuo"[45]. Al mismo tiempo insiste en la necesidad de estudiar los vínculos "entre la expansión guerrillera y las dinámicas cotidianas de compadrazgos, amistades y odios entre familias y veredas"[46].

Esta situación hace que, en cierto sentido, se pueda generalizar al caso de la dominación clientelista de los gamonales locales adscritos a los partidos tradicionales los conceptos que María Teresa Uribe había utilizado para describir las territorialidades bélicas: los pobladores e incluso los funcionarios públicos de

[41] Andrés Peñate, 1999. o. c. p 79.

[42] Marco Palacios,1999. "La solución política al conflicto armado: 1982-1997", en: 1999. *Armar la Paz es desarmar la Guerra*", IEPRI, Fescol y CEREC, Bogotá, p.366.

[43] Daniel Pecaut, 1997. "Presente, pasado y futuro de la violencia": en: *Análisis político* No. 30, enero-abril de 1997, reproducido en el 2001. *Guerra contra la sociedad*, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá.

[44] Alfredo Rangel, 1999. " Las FARC-EP: una mirada actual", en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente, 1999. *Reconocer la guerra para construir la Paz*, CEREC, Uniamdes, Grupo editorial Norma, Bogotá, p. 39.

[45] Marco Palacios,1999. "La solución política al conflicto armado: 1982-1997", en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente, 1999. o. c, p. 381.

[46] Marco Palacios, 1995. "La solución política al conflicto armado: 1982-1997", en: o. c. p. 381. En una dirección similar se orientan los planteamientos de Deas para quien "la filiación política afecta el sentido de la familia, la identidad local, la identidad personal y el compromiso ideológico", en "Canjes violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia", en: Malcolm Deas y Fernando Gaitán, 1995, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Fonade, DNP, Bogotá, p. 28.

esas localidades sienten que sobre ellos gravitan "dos órdenes políticos y jurídicos con capacidad de sanción, pero con diferente nivel de eficiencia, el del Estado y el del contraestado. Este orden alternativo recibe diferentes nombres según las regiones: "la ley de atrás" en el Magdalena Medio, "la ley del monte" en Urabá y el Sur del país, "la ley de la guerrilla" en el cañón del Cauca.[47] Pero esta situación se presenta con mayor frecuencia en los territorios de reciente colonización, donde las instituciones estatales apenas comienzan a hacer presencia o en los territorios donde tampoco se han consolidado las redes de cohesión y jerarquización social que sirven normalmente de base para la articulación a la nación por la vía de los partidos tradicionales. En estas situaciones, se producen "fenómenos de inorganicidad y de fragmentación en la amplia y compleja fronda de la burocracia estatal"[48], que reflejan la fragilidad de la soberanía estatal en esos territorios, manifestada en el escaso control que tienen los altos poderes públicos sobre sus propias burocracias locales y regionales, sobre sectores de las fuerzas de seguridad y sobre un conjunto de empleados que desempeñan sus labores en esos territorios.

Sin embargo, la actividad de la guerrilla será distinta según se inserte en las zonas de colonización reciente o en las zonas donde existe una estructura "gamonalicia" consolidada. El surgimiento de la guerrilla en las primeras zonas le permitió, como señalaba Pécaut, convertirse ella misma en red de poder y adelantar un proceso de centralización del poder político en sociedades de reciente asentamiento, con el apoyo no sólo de los campesinos, sino también de los hacendados que "quieren orden"[49] y quienes, en el caso de "estar en regla, pueden ser protegidos incluso de las reivindicaciones de los campesinos"[50]. Así pudo la guerrilla, muestra Palacios, consolidar el "papel de clase política local alternativa en muchas comarcas del Arauca, Meta, Guaviare y Caquetá"[51], pero sin buscar explícitamente ninguna articulación con el Estado central. Sin embargo, la pervivencia de las Juntas de Acción Comunal, que son asociaciones de pobladores a la vez que organizaciones ligadas al Estado colombiano, en zonas controladas por la guerrilla, junto con el interés por una mayor inclusión al Estado por parte de los mismos colonos que apoyan a la guerrilla, muestra que no hay una oposición tan radical entre las zonas controladas por la guerrilla y aquellas reguladas por el Estado[52]. E incluso y como han venido señalando distintos autores, muestra que la violencia política forma parte del repertorio con el que algunos actores reclaman la atención del Estado, no su disolución[53].

La consolidación de la guerrilla como red de poder en sociedades de "reciente asentamiento" se hizo posible porque ella misma fue protagonista del proceso de colonización. Por el contrario, en las zonas más integradas a la economía y la sociedad nacionales, los grupos de guerrilla van a aparecer como una amenaza a

[47] María Teresa Uribe, 2001. o. c., pp. 261-262.

[48] María Teresa Uribe, 2001. o. c, pp. 256-257.

[49] Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz 1998. *La violencia y el municipio colombiano 1980-1997*, Facultad de Ciencias Sociales, CES, Universidad Nacional, Bogotá, p 77.

[50] Daniel Pecaut, 1997. "Presente, pasado y futuro de la violencia", en: *Análisis político*, No. 30, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, enero-abril de 1997, p.20.

[51] Marco Palacios, 1999. "La solución política al conflicto armado:1982-1997", en: 1999. *Armar la Paz es desarmar la Guerra*, IEPRI, CEREC, Fescol, Bogotá, p. 377.

[52] Legrand, Catherine, 1994. "Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debates", en: *El Agro y la Cuestión social*, Ministerio de Agricultura, Bogotá, 1994.

[53] Francisco Gutierrez, 1998. "¿Ciudadanos en armas?", en: *Las violencias: inclusión creciente*. Compilado por Jaime Arocha, Miryam Jimeno, Fernando Cuibides, CES, Universidad Nacional, Bogotá, 1998.

la red de dominación ya impuesta, como un obstáculo para las relaciones entre las autoridades locales y las autoridades nacionales y para el control que una red política ya consolidada posee sobre cierto territorio y su población. Esa situación tiende a alentar la constitución de los grupos paramilitares en regiones cuya dominación política reposa no en la burocracia del Estado central sino en redes de poder articuladas por el bipartidismo. El caso más ilustrativo al respecto es el de las llanuras de la costa caribe, cuyos territorios están integrados marginalmente a la economía nacional, pero son definitivos en la articulación política bipartidista.

Por eso, cuando las guerrillas salieron de su nicho original y proyectaron su acción hacia zonas menos periféricas, donde ya existían lazos de patronazgo y clientelas previamente constituidos, se encontraron con un enemigo que asimilaba sus prácticas políticas, militares y sociales. El desdoblamiento de los frentes guerrilleros y su expansión hacia regiones de alta productividad y mayor desarrollo infraestructural hizo evidente su "intencionalidad estratégica de conectar territorialidades bélicas entre sí" para ampliar su presencia y control en macrorregiones del país y lograr afectar grandes ciudades y municipios económicamente más florecientes, hasta entonces más o menos al margen del conflicto armado. Pero en esas zonas la guerrilla enfrenta la poderosa resistencia de redes constituidas de poder[54], que explican tanto el carácter reactivo de los grupos paramilitares frente a los abusos y extorsiones de la guerrilla como también la desarticulación de los niveles locales y regionales de poder con respecto a la política del orden nacional y la burocracia del Estado central.

Desterritorialización y terror

El choque de la ampliación de la actividad guerrillera con esos poderes ya establecidos –de hecho- muestra la precariedad de estos órdenes alternativos, cuya naturaleza cambiante se hace evidente cuando se enfrentan al surgimiento de otros órdenes alternativos de hecho. La reacción del paramilitarismo ha venido desafiando las soberanías de los órdenes alternativos construidos por las guerrillas en las zonas tradicionalmente controladas por ellas, yendo más allá de sus ámbitos regionales de poder al consolidarse como aparatos militares con cobertura multirregional. Esto los hace capaces de ejecutar acciones bélicas más allá de sus sitios de origen y de su emplazamiento tradicional, ya que su acción se orienta preferentemente, con claro conocimiento de las territorialidades bélicas, hacia la disputa del control territorial de los grupos insurgentes, el monopolio sobre los recursos económicos de las regiones y las tramas de sociabilidad que sirven de base a los mecanismos políticos de representación e intermediación, lo que les procura cierta legitimidad social.

En ese mimético juego de espejos que la asemeja a la guerrillera, la estrategia paramilitar se concreta en incursiones en los pequeños caseríos o veredas donde se refugian y abastecen los grupos insurgentes, donde éstos esconden a los secuestrados y almacenan sus armas, para buscar desarticular sus corredores y redes de comunicación. Esto produce el desdibujamiento de las fronteras que antes se consideraban fijas, a lo que se añade el hecho de que la fragilidad de la adhesión ideológica de los combatientes y la fluidez de sus identidades hacen que puedan contar con la guía y el apoyo de antiguos guerrilleros y colaboradores de la guerrilla. Esto les permite realizar asesinatos selectivos, sin abandonar tampoco el recurso a las masacres indiscriminadas y a los actos de sevicia y las torturas de las víctimas frente a las poblaciones que son forzadas a presenciarlas[55].

54 Daniel Pecaut, 1999, " Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano", en *Revista Colombiana de antropología*, volumen 35, enero-diciembre de 1999, Reproducido en Daniel Pécaut, 2001, *Guerra contra la sociedad*, Planeta Colombiano, Bogotá, p.259.

55 Daniel Pécaut, 1999, o. c., pp. 264-265

Frente a las amenazas del avance guerrillero contra las redes de poder de los gamonales tradicionales, los grupos paramilitares intentan reestablecer la dominación de la que estos políticos tradicionales habían sido desplazados tanto por la acción insurgente como por los programas de reformas sociales y desregulación económica puestos en marcha por el Estado central. Ambos procesos son, en cierto sentido, correlatos de los esfuerzos centralistas de distintos gobiernos que trastocan de manera importante las relaciones entre el gobierno y sus intermediarios regionales. Esta situación es evidenciada por Mauricio Romero en el caso de Córdoba, donde los intentos de reforma agraria de Lleras Restrepo y la política de paz de Belisario Betancur incidieron en la desarticulación entre poderes regionales y Estado central, que se convirtió en antecedente de la consolidación del proyecto paramilitar[56]. Los antiguos intermediarios del Estado se sentían entonces traicionados y sus rivales interesados en debilitar tal dominio se encontraban abruptamente fortalecidos con una política estatal. Esta evolución de Córdoba indica que el conflicto armado no es exterior a un Estado ya construido al que amenaza, sino que de alguna manera participa del proceso de su construcción e interviene en la negociación permanente de alianzas políticas con formas de regulación social ya existentes.

En esa situación de órdenes alternativos en conflicto, el poblador común queda indefenso, vulnerable y librado a sus propias fuerzas, al volverse totalmente arbitrario y azaroso cualquier principio de organización predecible: la carencia de cualquier organización para la acción incrementa los niveles de incertidumbre y desconfianza. Así, concluye María Teresa Uribe, las adscripciones de la población a uno u otro de los órdenes alternativos que compiten por su lealtad terminan siendo motivadas más por razones circunstanciales, "como vivir en un territorio marcado" por el dominio de un grupo particular, o la necesidad de supervivencia, que por la aceptación ideológica de un proyecto político determinado o con identidades culturales o valorativas. En la valoración que se hace aquí de la situación de los pobladores se destaca una vez más la necesidad de revisar la comprensión de lo político que tiende a darle peso a lo "ideológico", en detrimento de las prácticas de interacción como tal.

Estas identidades suelen ser muy frágiles tanto por la heterogeneidad social y cultural de los pobladores como por la experiencia de éstos y la tradición familiar que los previene sobre la fragilidad y vulnerabilidad de todo dominio, en esas situaciones de disputa territorial: la certeza de que la protección otorgada por un grupo hegemónico en la región puede desaparecer súbitamente con su sustitución por otro, que considera enemigos a los protegidos por el primero, hace que las gentes recurran preferentemente a "la invisibilización, al silencio, o al éxodo". De ahí la fluidez de lealtades que hace fácil el cambio de un bando a otro, "la creciente mercenarización de los ejércitos, el carácter cada vez más opaco y más civil de la confrontación, la amplísima diferenciación regional y la predominancia de los intereses semiprivados sobre los públicos y políticos"[57]. Aunque tal situación suele caracterizarse en términos que recalcan las "fallas", o cosas que no serían deseables (la fragilidad de las identidades, el silencio de los actores, el que los pobladores se acomoden al actor de turno, entre otras cosas) debe recordarse que se trata de formas de interacción social en espacios recientemente poblados, de gran dinamismo, pero en los que no se han consolidado unas pautas de regulación y control. El cáracter no sedimentado de estos poblamientos incide en la indiferenciación entre lo privado y lo público, lo político y lo violento, o más puntualmente, entre lo cívico y lo violento. En esta dirección, se orienta Francisco Gutiérrez al recordar que "en general, algu-

56 Mauricio Romero, 1998. "Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento de Córdoba", en: *Revista Controversia*, No. 173, CINEP, Bogotá, 1998, p.81.

57 María Teresa Uribe, 2001. o. c., p. 267.

nos actores violentos cifran su apuesta sobre valores (proto)cívicos (en un doble sentido)... por una parte, la violencia y el terror aparecen como recursos que permiten sucesivas y rápidas incorporaciones, como un atajo eficaz para obtener reconocimiento y bienestar que de otra forma serían inalcanzables. Por otro lado, la violencia se pone al servicio de una pedagogía moralizadora"[58].

Esta situación de "soberanías fluidas" y lealtades igualmente cambiantes, debido a la falta de control permanente por parte de los actores armados en sus respectivas áreas de influencia, deja a la población civil desprovista de un sistema fijo de referencia para su comportamiento. Ese marco tan indefinido lleva a que los actores armados de distinto signo ideológico recurran constantemente a estrategias de terror para mantener la lealtad de la población de los sitios que tienen bajo su influencia pero sin poder tampoco garantizar su protección de manera permanente. Esto deja expuesta a la población a las represalias de la contraparte; además, como los mismos actores armados pueden a veces cambiar de bando, muchas veces la población civil de las áreas en conflicto no sabe a qué atenerse ni a quién obedecer.

La situación se agrava todavía más por las características del enfrentamiento armado, que no se reduce al combate abierto entre las partes por el control de un territorio y el aniquilamiento del enemigo, aunque en los últimos años de la década estudiada los combates habían venido aumentando de manera significativa. En buena parte, el conflicto armado colombiano se caracteriza por ser una "guerra por tercero interpuesto", donde los adversarios no se enfrentan directamente entre sí sino que golpean a las bases sociales, reales o supuestas, del enemigo, para "quitarle el agua al pez", en términos de los paramilitares. Esto significa que, en buena medida, el conflicto colombiano es una guerra contra la población civil.

Esta situación hizo que Daniel Pécaut titulara su último libro como *Guerra contra la Sociedad*, que recoge varios de sus ensayos recientes sobre el conflicto colombiano. En uno de ellos[59], señala el deslizamiento posible de la visión banal de la violencia hacia el terror: inicialmente la violencia no se veía en Colombia como catástrofe o guerra ni como producto de un conjunto de prácticas delincuenciales sino como "un proceso banal" que ofrecía oportunidades para salidas individuales y producía acomodamientos por medio de cambios muy fluidos de adhesiones de un bando al otro, con ciertas regulaciones. Además, la presencia local de un protagonista armado no obedecía siempre a la lógica del enfrentamiento sino que podía responder, a veces, a una lógica de protección. Esto Pécaut lo explica recurriendo a un libro de Gambetta sobre la mafia siciliana, que es presentada como "un sistema de protección que asegura, en un contexto de desconfianza, las condiciones que normalmente se fundamentan en la confianza". Pécaut muestra cómo las guerrillas, los paramilitares y las milicias populares de los barrios periféricos cumplían esta función dentro de sus demarcaciones territoriales. Y señala, además, que este sistema de demarcación no era totalmente novedoso en Colombia ya que los partidos tradicionales habían operado desde tiempo atrás en muchos municipios del país. Pero con una diferencia significativa: "la inserción o no de estos repartos en el campo de la política institucional"[60].

De esta manera la adhesión a los actores armados reposa principalmente en una dinámica instrumental[61], lo que no disminuye su importancia ni la despoja de todo sentido, Sin embargo, tal predominio significa

58 Daniel Pécaut, 2001. "De la violencia banalizada al terror", en: *Guerra contra la sociedad*

59 Daniel Pécaut, 2001. o.c., p. 203.

60 Daniel Pécaut, 1997, "Presente, pasado y futuro de la violencia", reproducido en: 2001, *Guerra contra la sociedad*, antes citado, p. 128.

61 *Ibídem*.

que los ritmos propios del conflicto irregular no permiten fundamentar nuevas adhesiones ideológicas y pautas de identidad colectiva en los términos con que usualmente se caracterizan los procesos políticos. La tensión reside aquí en el contraste entre la temporalidad que requiere el establecimiento de un tipo de dominación, la lógica del conflicto irregular y la existencia permanente de lugares a donde huir o de enemigos poderosos que se unan a la lucha. En otras palabras, así como en algunas regiones los actores armados pueden convertirse ellos mismos en red de poder local; en otras regiones tal dominación no tiene ocasión de sedimentarse, ya que se enfrentan con sociedades de colonos campesinos, que están reinventando las categorías de distinción y jerarquización social. Además, ellos no cuentan con mucho tiempo o recursos para hacerlo, pero sí con muchos enemigos del proceso.

Por eso, no es casual que los distintos actores armados tengan los mismos problemas para insertarse o participar en la vida política local de las comunidades campesinas organizadas, ni que tanto guerrilleros como paramilitares tengan rivalidades con las organizaciones sociales más o menos autónomas. Contrario a lo que comúnmente se cree, no son solo los paramilitares los que enfrentan las organizaciones sociales preexistentes en la región donde aspiran extender su dominación. Pécaut ha llamado la atención sobre las dificultades que enfrenta la guerrilla para insertarse en los órdenes locales articulados en torno a organizaciones sindicales o campesinas[62]. Algo similar señalan Cubides, Olaya y Ortiz, que muestran la ambivalencia de la presencia de los actores armados: " promueven formas de organización y de solidaridad bajo su férula, pero impiden cualquier grado de organización autónoma (...) se arraigan en las poblaciones gracias a sus ofertas de seguridad, pero terminan exasperando a la comunidad"[63]. Estos señalamientos constatan algo que se ha sostenido a lo largo del documento: el hecho de que las guerrillas se insertan, de manera preferente, en zonas donde no existe regulación local ni sociedad jerarquizada. Por ello, es preciso repensar qué tipo de Estado se configura por medio de la implantación de estos precarios controles territoriales en tan cortos períodos de tiempo. Para algunos, la solución más fácil sería afirmar la inexistencia del Estado en esas regiones, pero esto dejaría sin explicar la permanencia de buena parte de las prácticas de control y de las formas de vinculación de la población, que se mantienen aun cuando cambie el actor armado y la red política que ejerce el control.

Este punto invita a reconsiderar la comprensión predominante de lo político, como el establecimiento de consensos o de acuerdos ideológicos. Más aún, habría que recordar la insistencia de Max Weber y de Michael Mann en el carácter "eminentemente territorial" del poder político y en que una asociación política se define no por sus propósitos, sino por sus procedimientos, por el sello que le imprime a la interacción social que tiene lugar bajo su marco.

Pero de todos modos, en estas circunstancias el reparto del poder entre los actores armados y sus redes de dominación podía ser vivido como situación ordinaria: el terror y la violencia podían ser banalizados y considerados como parte del orden natural de las cosas. Esto debido, según Pécaut, a que la dificultad para construir una memoria compartida que permitiera dar sentido a los hechos hacía difícil percibir la novedad de los hechos violentos, que se consideran omnipresentes en un pasado míticamente condenado al eterno retorno. Y esta confusión está presente, para este autor, no sólo en las zonas de colonización reciente donde la autoridad del Estado es precaria, sino también en regiones más integradas a la economía y sociedad nacionales[64].

62 Daniel Pécaut, 1997, "Presente, pasado y futuro de la violencia", reproducido en 2001, *Guerra contra la Sociedad*, antes citado, p. 128.

63 Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya, y Carlos Miguel Ortiz, 1998. *La violencia y el municipio colombiano*, Facultad de Ciencias Sociales, CES, Universidad Nacional, Bogotá, p 239.

64 Daniel Pécaut, 2001. "De la violencia banalizada al terror", o. c, pp. 89-156.

Pero esta banalización de la violencia cede luego el lugar a estrategias de intimidación: en otro de los artículos recogidos en el libro[65], Pécaut señala cómo los protagonistas armados recurren cada vez más al terror "como componente normal de sus estrategias locales", como medio privilegiado para aislar al adversario y cortarle sus eventuales apoyos de la población civil en regiones enteras: Magdalena medio, Córdoba, Urabá, Barrancabermeja, nordeste de Antioquia, Putumayo y Meta. Con una novedad importante: ahora el terror afecta a regiones que no habían sido catalogadas como lugares de enfrentamiento o zonas aledañas a ellos sino a zonas cada vez más lejanas de los feudos tradicionales de los actores armados: incursiones rápidas, asesinatos selectivos, amenazas y rumores muestran que no hay protección que valga en ningún sitio. Por eso, opina este autor, no se puede descartar la hipótesis de que el terror podría agudizarse, pues todo parece indicar que tanto guerrillas como paramilitares buscan, en lo sucesivo, la polarización general del país[66].

Este recurso cada vez más frecuente al terror afecta tanto a la delimitación territorial tradicional del control de los actores armados como a la construcción de nuevas referencias subjetivas de identidad. Hasta hace poco se consideraba que la violencia iría pareja al dominio de territorios bien definidos, pero Pécaut introduce matices a esta consideración al señalar que ni el ejército nacional ni la guerrilla del M 19 han buscado, por lo general, establecer estrategias permanentes de ocupación territorial, a diferencia de las FARC, el ELN, el EPL, los paramilitares y las milicias populares. Más puntualmente, el autor insiste en que, al lado de las dinámicas de territorialización que promueven los actores armados, es preciso analizar la desterritorialización que dinamizan al utilizar el terror y someter la interacción a la incertidumbre[67].

De ahí que sea importante recordar que el significado de estos asentamientos se ha venido modificando con el tiempo: inicialmente, las FARC pretendieron asentarse en las zonas de conflicto agrario para reorientarlos, pues en esa fase el control territorial no era sino un aspecto de la organización de la población. Luego, la multiplicación de los frentes de las FARC y el ELN desde comienzos de los ochenta significó una ruptura del proyecto de consolidar territorios propios y concretó su decisión de ampliar su inserción a los principales polos de producción de bienes primarios para conseguir abundantes recursos financieros mediante la extorsión. Sin embargo, la decisión de guerrillas y paramilitares de "tutelar" las administraciones locales siguen significando cierta tendencia a la territorialización[68]. Pero, de todos modos, muestra Pécaut, la competencia entre los grupos armados por el control de los mismos espacios rompió esas territorialidades y produjo un notable cambio en la correlación regional de fuerzas. Pero no se trataba tan solo de la sustitución de una red de control por otra, sino de la aparición de un nuevo contexto, signado por la incertidumbre, pues ahora los grupos se metamorfosean y las regiones cambian súbitamente de dueño, sin saberse quién va a prevalecer. Por otra parte, los actores armados están mostrando cada vez mayor capacidad para atacar lejos de sus bases hasta golpear incluso el corazón del feudo adversario: los paramilitares han ejecutado acciones en las zonas de dominio tradicional guerrillero, mientras que las guerrillas han realizado ataques y atentados en las regiones conquistadas por los paramilitares. Así, se han ido debilitando las lógicas tradicionales de territorialización y los espacios sustraídos a la influencia de los actores armados se reducen cada día. Para Pécaut, puede hablarse entonces de cierta homogenización del espacio, ya que todos sus puntos se orientan en torno a la presencia de los actores armados, pero se trata de

[65] Daniel Pécaut, 2001. o.c., pp. 229-232.

[66] Daniel Pécaut, 2001. o, c., pp. 232.234.

[67] Daniel Pécaut, 1999. "Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad", o. c., pp.237-239.

[68] Daniel Pécaut, 2001. o. c., pp.239-240.

un espacio desmaterializado, cuyos puntos se definen por su posición, real o virtual, en las redes mediante las cuales hacen presión los combatientes. En ese sentido, el autor retoma el concepto de *"no-lugar"* de Marc Augé para referirse a "espacios que, privados de toda característica material, resultan de las interacciones de fuerza"[69].

Este no-lugar se caracteriza por la ubicuidad y la incertidumbre, pues, incluso donde se mantiene cierta territorialidad, ésta se vuelve porosa, porque los pobladores no pueden estar seguros de estar protegidos en ninguna parte, ya que el protector actual puede convertirse mañana en el enemigo y el amigo del vecindario puede transformarse en el informador que señala las víctimas de la masacre. Ni siquiera el espacio más privado puede servir de refugio seguro, pues todos se saben potencialmente o realmente vigilados por todos los grupos armados y el contacto más inocente con alguno puede resultar sospechoso para el otro, pues los criterios de evaluación de la posición de cada uno en las redes de control son inciertos. Esta incertidumbre obedece a que estas redes comprenden, según Pecaut, "numerosos círculos concéntricos":

"Al lado de los miembros de tiempo completo de la organización armada, existen los colaboradores ocasionales, los milicianos y otros asociados. Existen también los que prestan pequeños servicios. Y, está, finalmente, el grueso de la población que debe asistir a reuniones o participar en marchas colectivas y otras manifestaciones"[70].

Como muestra el autor, esta situación resulta muy problemática para los pobladores de estas regiones conflictivas, que habían aprendido a manejar su relación con los actores armados presentes en su territorio con estrategias que resultan contraproducentes cuando un nuevo actor quiere conquistar ese espacio: por ejemplo, cuando los paramilitares se apoderan de la región de Urabá, la guerrilla se repliega dejando expuestos a sus milicianos y sus colaboradores permanentes u ocasionales. Lo mismo ha ocurrido con los asesinatos de los organizadores y participantes en las marchas cocaleras de 1996 en el Caquetá y con los secuestros y amenazas de las FARC y el ELN contra las mujeres que establecían relaciones afectivas con militares.

Por eso, el no-lugar se caracteriza, en tercer lugar, por la desconfianza generalizada, el debilitamiento de las solidaridades y el repliegue a las estrategias individuales: hay que desconfiar no solo del grupo armado actualmente en control del territorio, sino de los vecinos y hasta de los familiares, que pueden convertirse en informantes de uno u otro grupo, o estar adscritos en bandos opuestos. Por esto, la opción más racional sigue siendo la del *"free rider"*, que busca adaptarse individualmente a las condiciones imperantes y evita participar en acciones colectivas, ya que en esas regiones las organizaciones autónomas existentes, como las juntas de acción comunal o de colonizadores, son frecuentemente intimidadas o instrumentalizadas por los actores armados. Así, la participación en ellas es correr el riesgo de ser señalado como militantes o ser reclutado para otras tareas[71].

Por último, concluye Pécaut, el no-lugar es resultado de "la dislocación de referentes institucionales": el ejército es visto como un actor más del conflicto, igualmente temible, mientras que la justicia es una mera abstracción y los funcionarios locales son los blancos favoritos de los actores armados. Por supues-

69 Daniel Pécaut, 2001, o. c., pp.239-240.

70 Daniel Pécaut, 2001. o. c., p.240.

71 Daniel Pécaut, 2001, o. c., p.241.

to, el escepticismo frente al Estado tiene raíces históricas muy profundas, pero la percepción de aumento de la corrupción en los últimos años ha acentuado profundamente el descrédito de las instituciones estatales.

En otro artículo[72], a propósito del problema del desplazamiento forzado, el autor retoma el tema de las consecuencias de esta dislocación de los referentes nacionales, especialmente en lo que toca a la noción de ciudadanía. Pécaut parte del hecho de que la ciudadanía, además de derechos y deberes reconocidos por el Estado, supone una dignidad ligada a la pertenencia a una comunidad política nacional. Y señala que la mayoría de los desplazados, sobre todo los provenientes de zonas de colonización, jamás han tenido acceso a ella. En el caso del campesino europeo, que hereda la tierra de generación en generación, la garantía sobre la propiedad de la tierra le permite insertarse en una trama social, que es portadora de una memoria y de un futuro, lo que le permite reconocerse como persona y entrar en relación con una comunidad nacional.

En cambio, en Colombia, esta relación del campesinado con la comunidad nacional es precaria, ya que prevalece su dependencia de las redes particulares de poder. Para sostener su argumento, el autor afirma que en Colombia el acceso a la tierra ha sido siempre incierto, ligado a los intermediarios políticos, como lo evidencia el caso de los colonos de las zonas cafeteras en 1930 que solo poseían la tierra por medio de la relación con los jefes políticos locales, que les ayudaban a recibir las tierras a cambio de sus votos, que a su vez les servían a estos jefes para sus transacciones políticas con las autoridades departamentales o nacionales. Además, el caso de Trujillo, en el Valle, le sirve para mostrar que había casos en que esos títulos de propiedad eran revocables, según fuera la relación de los campesinos con esos jefes locales, que podían hacerlos expulsar de sus parcelas en cualquier momento. Recuerda también que incluso hoy, en zonas de reciente colonización, los títulos de propiedad, cuando logran obtenerse, se retrasan bastante con respecto a la ocupación de la tierra. Y, para reforzar el análisis de la precariedad de la posesión de la tierra en zonas de colonización, se apoya en los relatos de Alfredo Molano sobre "el peregrinaje de los colonos amazónicos, obligados a revender las mejoras logradas en sus terrenos a quienes poseen capitales y a ubicarse cada vez más lejos". También muestra cómo en Urabá, el avance de la concentración de tierras en manos de los propietarios tradicionales o de los "nuevos ricos"(los narcotraficantes) expulsa a los colonos campesinos[73].

Siguiendo con el paralelo con el campesino europeo, Pécaut reconoce que también en Europa la inserción del campesinado en la política nacional y su emancipación de la dependencia de los notables fueron producto de un largo proceso, a lo largo del siglo XIX. Pero con diferencias notables, ya que en Colombia los colonos pueden sufrir sanciones e incluso la muerte, si desafían al orden local impuesto por los gamonales, lo que deja a los colonos de regiones recientemente poblados sin otra alternativa que "plegarse a la tutela de cualquier grupo político que disponga de medios de fuerza": esos grupos pueden ser manejados por los políticos tradicionales, pero también por la guerrilla y los paramilitares. Con el tiempo, estos grupos producen "comportamientos de identidad colectiva": en el caso de Trujillo, por el prestigio del gamonal en el departamento y en Urabá, bajo el dominio inicial de las FARC, los habitantes terminaron por interiorizar los comportamientos exigidos por el grupo armado. Pero, según Pécaut, se trata, en ambos casos, de "una identidad delegada"y subordinada a los poderes de hecho, en vez de ser expresión de la

[72] Daniel Pécaut, 2001, "A propósito de los desplazados en Colombia", en: *Guerra contra la sociedad*, o.c., pp. 257-278.

[73] Daniel Pecaut, 2001, p. 263-264.

ciudadanía, de sus derechos y sus formas propias de acción. En este punto, sería interesante reconsiderar la comprensión habitual de las identidades como proyecciones sociales carentes de conflictos. Y por esta vía, insistir en que toda identidad es disputada, peleada, y configurada con retazos de las interacciones que se hacen siempre en condiciones conflictivas[74]. Así, la distinción entre identidades delegadas y subordinadas aparecería sólo como una distinción de grados. No hay identidades sin elementos de subordinación.

Obviamente, en este horizonte espacial y temporal, la idea de ciudadanía no tiene mucha sustancia: como muestra el autor, es difícil hablar de ciudadanía cuando "las instituciones formales parecen singularmente abstractas y lejanas", ya que ella implica "el sentimiento de pertenecer a un conjunto social concreto y de beneficiarse de las garantías que ofrecen las instituciones". Y la fragilidad del "sentimiento comunitario" obedece, según Pecaut, más a las presiones ejercidas por las redes políticas que a la heterogeneidad de la población. Por otra parte, la presencia de las instituciones sólo se mide por las inversiones ocasionales de la administración pública, pues en cuanto a su presencia simbólica, es evidente la ausencia frecuente de "los actores capaces de dar sustento a cualquier proceso de institucionalización simbólica":

"Los jueces, los policías, los alcaldes y los concejales municipales se vuelven partícipes de las interacciones que van definiendo las reglas de hecho de los juegos locales. Tienen que formar parte de las redes organizacionales prevalecientes, luchar por la apropiación del poder, negociar con los protagonistas de la violencia. Nada más lejos de la institucionalidad democrática"[75].

Los problemas de los desplazados muestran las consecuencias políticas de la territorialización imperante en las zonas de colonización, que se hacen más evidentes con los problemas de desterritorialización del poder producidos por el terror. A ellos, hay que sumar, dice Pecaut, la *destemporalización* producida por la diversidad de los tiempos en los que se mueve el Estado, la guerrilla y la población civil afectada. En ese sentido, señala la carencia de sentido de proceso histórico orientado hacia el futuro, que caracteriza la percepción que tiene la población colombiana sobre la violencia. Según el autor, la mirada sobre la violencia oscila entre la percepción inmediatista de acontecimientos sucesivos que no se insertan en una historia con sentido y la representación mítica de una historia de violencia omnipresente e ininterrumpida a lo largo del desarrollo del país: la violencia actual se percibe como la continuación de la Violencia de los años cincuenta, que a su vez reeditaba la de la Guerra de los Mil Días, leída igualmente en continuidad con las guerras civiles del siglo XIX.. Pécaut vuelve aquí a una de sus ideas recurrentes: las consecuencias de haber tendido un muro de silencio sobre la Violencia de los cincuenta por medio de una lectura despersonalizada de ella, sin responsables conocidos[76].

Además, sostiene este autor, la memoria de la violencia de la década de los cincuenta como reedición de las anteriores guerras civiles, se constituye en el marco constitutivo de los recuerdos de los desplazados, así hubieran transcurrido dos generaciones, pues las marcas del desplazamiento originado por ella permanecen en "las representaciones que los colonos tienen del mundo social y político". Así se hayan establecido sus antepasados en otras zonas rurales o urbanas, el traumatismo sufrido sigue vivo en sus descen-

[74] Ingrid Bolívar, 2002. "Identidades: la construcción del sujeto político" Mimeo de Investigación. Proyecto Identidades culturales y tipo de Estado. Una exploración de la multiculturalidad en tres grupos poblacionales, Colciencias, 2001.

[75] Daniel Pécaut, 2001. o. c., p. 266..

[76] Daniel Pécaut, 2001. o. c., p.242-249.

dientes, "como si, desde entonces, la vida social hubiera estado afectada por la inestabilidad". Para Pécaut, estos recuerdos son el testimonio constante de que "la noción de comunidad nacional carece de contenido", pues la Violencia parece haberles inculcado, una vez para siempre, la convicción de que "la división entre comunidades cuenta más que la pertenencia a una misma nación". Pero tampoco los partidos tradicionales fueron nunca comunidades unificadas sino "coaliciones precarias de múltiples redes de poder" y la Violencia favoreció los procesos de fragmentación. Por eso, no es raro que la idea nacional de muchos colombianos no tenga un contenido muy preciso y sean más importantes las referencias a los poderes legales o ilegales[77]. Sería interesante comentar estos planteamientos sobre la nación colombiana desde las discusiones actuales que resaltan el cáracter conflictivo de la construcción de la nación y sus especificidades en los países del Nuevo mundo[78].

La última consecuencia del recurso al terror tiene que ver, según Pécaut, con la "desubjetivación" que produce el desarraigo. Desubjetivación con respecto a esos referentes espaciales y temporales, inducido por el terror, en la identidad de los individuos, cuya imagen queda fundamentalmente escindida. Esta identidad queda marcada por la dificultad de insertar su experiencia personal en un relato colectivo y la tendencia a referirse simultáneamente a normas y valores contradictorios, sin poderse decidir por alguno de ellos. Sin embargo, señala el autor, la protección y coacción impuestas por las redes de dominación pueden proveer cierta identidad colectiva y algún sentido de pertenencia a una comunidad, como se evidencia en el caso de la afiliación de jóvenes a las organizaciones armadas, que satisfacen expectativas de un estatus que no podrían alcanzar en la vida ordinaria. El prestigio del uniforme, el poder de las armas, el sentimiento y el beneficio de estar inserto en una organización, la solidaridad con una causa son algunas de las vinculaciones sociales que confluyen en la acción armada. Pero luego matiza esta percepción al señalar que las opciones nunca son previsibles por la diversidad de ofertas, la facilidad para pasar de la adhesión de un grupo a otro y los límites temporales que tienen necesariamente la pertenencia a estos grupos[79].

Por esó, concluye este autor, la afiliación a una organización armada no garantiza necesariamente la permanencia de la identidad individual, sobre todo porque la violencia se define principalmente por las prácticas, y muy poco por adhesiones ideológicas, pues las guerrillas ya no se toman el tiempo necesario para dar a sus jóvenes reclutas una formación políticas más allá de fórmulas estereotipadas[80]. Esto se muestra, según Pécaut, en el hecho de que las entrevistas, realizadas en 1992, con los jóvenes desmovilizados del EPL no mostraban el recurso a ninguna utopía para justificar su pertenencia a la guerrilla a ninguna utopía, ni la referencia a algún héroe revolucionario o episodio de la historia colombiana, sino que se reducían simplemente a la narración de sus acciones más significativas. Y también el hecho de recurrir a referentes muy contradictorios, presentados como igualmente válidos, cuando los jóvenes de las diferentes agrupaciones armadas, tratan de justificar sus acciones o de reflexionar sobre su sentido[81].

77 Daniel Pécaut, 2001. o. c., pp. 267-268..

78 Ingrid Bolívar y otros, 2001. *Nación y sociedad contemporánea*, Cuadernos de Nación, Ministerio de Cultura, Bogotá.

79 Daniel Pécaut, 2001, o. c., pp 249-250.

80 Una interesante presentación de los problemas logísticos y administrativos implicados en la educación política de la organización de las FARC puede leerse en Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe, 2002. *El orden de la guerra. Las FARC entre la organización y la política*, CEJA, Bogotá.

81 Daniel Pécaut, 2001. o. c., pp 250-254

¿HACIA UN NUEVO "COLAPSO PARCIAL DEL ESTADO"?

La descripción de los órdenes alternativos que compiten por el control de las zonas en disputa y las rupturas que la evolución reciente del conflicto armado produce en las delimitaciones territoriales tradicionales de los grupos armados evidencian los límites del ejercicio estatal del monopolio de la fuerza y plantean serios interrogantes sobre la imagen modélica de Estado que subyace tanto en muchos de los estudios sobre violencia como en algunos análisis sobre las instituciones estatales. Algunos analistas como Harvey Kline señalan que muchos académicos colombianos han leído la crisis reciente como una reedición de la idea de Paul Oquist sobre el colapso parcial del Estado, aunque algunos expresan de manera explícita que no adoptan como punto de partida la visión del pasado como edad de oro imaginaria, que supondría el pleno control del Estado sobre la totalidad del territorio y el reinado de una armonía social, que nunca se han dado en la historia colombiana[82].

Ahora bien, muy distinta de esta mirada apocalíptica es la perspectiva que asume el propio Paul Oquist en su libro, que retoma su tesis doctoral sobre la Violencia de los años cincuenta, escrita a finales de los años setenta. Su visión de entonces permite analizar la perspectiva que insiste en la existencia de las territorialidades bélicas, ya que en el marco de su estudio Oquist caracterizó la violencia de los años cincuenta como el "colapso parcial del Estado" precisamente para dar cuenta de la coexistencia conflictiva de la dominación estatal con otros tipos de control político. El autor introdujo una interesante diferenciación entre las zonas donde el Estado tiende a establecer un control directo, que suelen ser las regiones "estratégicas y centrales", y otras regiones en las que "el poder del Estado es todavía tenue"[83]. Para Oquist, el "colapso parcial del Estado" se manifiesta "en la crisis e inoperancia de las instituciones establecidas, la pérdida de la legitimidad del Estado, la apelación del mismo a prácticas terroristas que debilitaron aún más la estructuración social existente, la ausencia física del Estado en grandes regiones del país y las contradicciones dentro del aparato armado del mismo"[84].

Según el propio Oquist, este "colapso del Estado" se revela como un problema de gran importancia en las regiones "centrales", pero hay muchas otras zonas donde tal colapso no tuvo mayores implicaciones: "...en Colombia había áreas que podían soportar la destrucción parcial del Estado sin experimentar violencia o por lo menos muy poca. En efecto, en Colombia hay ciertas áreas bien delimitadas en donde la menor manifestación del Estado, aún en circunstancias normales, se encuentra a varios días de camino, ya sea por río o a caballo. En estas regiones no reina el absoluto caos. Los moradores arreglan sus conflictos ellos mismos y raramente piden la ayuda de la autoridad. Sin embargo, en otros lugares existen intereses encontrados ya sea sobre las tierras, el control político local, la religión o los asuntos políticos de interés nacional que hacen necesaria la presencia permanente de la autoridad para mantener la estructura social existente"[85]. Desde la perspectiva de este politólogo, pionero de la investigación sobre la Violencia, "Colombia, a finales de los años cuarenta, era un país con regiones suficientemente diferenciadas y donde el poder local y regional era tan importante en la estructuración de la sociedad, que la coherencia local y regional de los grupos dominantes todavía podía compensar una ruptura estructural a nivel nacional"[86].

82 Harvey Kline, 1999. *State Building and Conflict Resolution in Colombia, 1986-1994*, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama, pp. 199-200.

83 Paul Oquist,1978. *Violencia, política y conflicto en Colombia*, Instituto de Estudios Colombianos, Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, p. 269.

84 Paul Oquist, 1978, o. c., pp. 322-323.

85 Paul Oquist, 1978. o. c., p. 276.

86 Paul Oquist, 1978. o. c., p. 47.

La insistencia de Oquist en la diferenciación regional de la violencia ha sido acogida y desarrollada por distintos investigadores. Pero no ha sucedido lo mismo con su énfasis en los poderes que estructuran internamente la sociedad y en la necesidad de establecer hasta qué punto tal estructuración de la sociedad pasa por las vías partidistas. Por esa vía Oquist sugería la existencia de grados diferenciados de poder del Estado en las regiones, pero esta sugerencia usualmente se pasa por alto, pues su insistencia en el colapso del Estado hacía suponer que este autor sostenía que el Estado colombiano había sido "fuerte y efectivo" en los años anteriores a la violencia.

Por el contrario, Oquist reconoce la "debilidad estructural" del Estado colombiano, pero a la vez señala que las primeras décadas del siglo XX son momentos de expansión y fortalecimiento de los aparatos estatales: para él, el análisis de la violencia y el consiguiente papel del Estado en la propagación de los conflictos deben situarse precisamente en el marco de tal expansión y de las crecientes atribuciones del Estado. Después de introducir todas estas diferenciaciones, Oquist se pregunta explícitamente qué sucede cuando el Estado se destruye en un área determinada, y responde que "eso depende de las contradicciones de tipo social que existan en dicha área y de la fortaleza o debilidad de los demás factores que estructuran la vida social"[87]. De ahí que el autor señale que la ausencia del Estado no conduce por sí sola a la violencia si no coincide con el deterioro de otras formas de control social y con la emergencia de contradicciones sociales que no se pueden resolver apelando a los mecanismos tradicionales. En sus palabras, "la pérdida del poder del Estado no presentó una situación absolutamente crítica para un grupo dado, puesto que frecuentemente su poder económico, social, político y aun militar y represivo estaba basado en relaciones extraestatales locales y no estaba sujeto a la derogación del gobierno nacional"[88].

La insistencia de Oquist sobre la forma como se articulan los distintos tipos de control político y su énfasis en el hecho de que la ausencia del Estado no coincide necesariamente con un "vacío de poder" o una "crisis de la regulación política" son retomados por una joven historiadora colombiana radicada en los Estados Unidos, Mary Roldán, en su tesis doctoral sobre el desarrollo de la Violencia en Antioquia entre 1946 y 1953[89], presentada en la Universidad de Harvard en 1992. Roldán reasume la diferenciación regional sugerida por Oquist para mostrar hasta qué punto las formas de control social no estatales logran neutralizar la violencia política nacional. Para ello, desarrolla algunos planteamientos de Oquist e insiste como él en que la crisis política nacional no produce necesariamente un vacío de autoridad en los niveles regional y local. De ahí que esta autora señale que es necesaria una mayor precisión conceptual para entender las formas como la crisis de una esfera política precipita o provoca una fractura en las otras. Precisamente la existencia de una forma de control o regulación política local con cierta independencia de la regulación política estatal exige una reconsideración sobre la debilidad histórica del Estado en Colombia. Y es que los vínculos entre las esferas políticas local y nacional se erigen como un lugar privilegiado para analizar el carácter del poder estatal en las regiones y la manera como aquel poder se articula con distintas formas de control político "tradicionales". Para ella, la violencia no puede explicarse por la ausencia del Estado en algunas comunidades, porque precisamente lo característico es que en tales comunidades existiera un dominio político más o menos estable. En sus palabras: "la escasa presencia del Estado en la mayor parte de las poblaciones colombianas no debe ser tomada como un vacío de autoridad. En vez de esto, o más

87 Paul Oquist, 1978. o.c., pp. 276-277.

88 Paul Oquist, 1978. *Ibídem*.

89 Mary Roldán, 1992. *Genesis and evolution of "The Violence" in Antioquia, Colombia*, Tesis doctoral en Historia, Universidad de Harvard.

bien, en conjunción con una muy limitada presencia del Estado, existían aún en los más pequeños reductos de población, mecanismos autóctonos de control social y de organización política"[90].

Además de llamar la atención sobre los vínculos entre los distintos tipos de control político y sobre el hecho de que una crisis política nacional no se traduce mecánicamente en un problema de desregulación política local, Roldán introduce una interesante tipología regional de las manifestaciones de violencia. A partir de los planteamientos de Oquist y Roldán, entre otros, puede empezar a considerarse que la diferenciación regional de la violencia es también un indicio de la diferenciación regional del Estado, de sus diversos grados de poder y de sus distintos tipos de relación con las sociedades locales. A propósito de esto, resulta pertinente señalar que Mary Roldan construye una tipología de sociedades locales en Antioquia a partir de algunas condiciones socioeconómicas de tales sociedades, pero especialmente a partir del tipo de violencia política y de la respuesta del Estado que tuvo lugar en ellas. Así, Roldán distingue entre unos municipios centralmente integrados cuya violencia no va a salirse de las delimitaciones partidistas y se va a restringir a lo "burocrático", y unos municipios de frontera donde la violencia tiende a incluir otro tipo de conflictos y a dar lugar a grupos de guerrilla.

Ahora bien, cuando Oquist y Roldán señalan que una crisis del Estado en el nivel nacional no se traduce sin más en una desregulación política local, recuerdan hasta qué punto la vida política puede o no enmarcarse en los límites estatales. Al mismo tiempo resaltan que sólo hay violencia cuando la crisis de la regulación social atraviesa los distintos niveles políticos. Por su parte, Paul Oquist recuerda las diferencias regionales en lo que él denomina "la estructuración estatal de la sociedad colombiana". Habría zonas del país donde la estructuración estatal de la sociedad es mayor y otras en las que tal estructuración es menor, sin que por ello tales zonas se encuentren expuestas a la violencia[91].

Esta situación, señalada por Oquist y Roldán, evidencia que hay un poder político de carácter dual, uno dentro de los límites estatales y otro por fuera de éstos, que se expresan en la regulación social previamente existente en las regiones y localidades. Por otra parte, el hecho de que el Estado solo intervenga directamente (con el ejército) en el control de la violencia en las zonas de colonización y que delegue en los mecanismos internos del bipartidismo el manejo de la violencia en los municipios "integrados", donde precisamente la violencia no escapa de los límites bipartidistas y tiende a limitarse a la competencia burocrática, es un indicador del sistema de dominio indirecto que ejerce el Estado colombiano mediante su articulación con los partidos tradicionales.

Precisamente ese tipo de señalamientos y el reconocimiento de los diferentes grados de poder del Estado en las regiones hacen importante la pregunta, no tanto por la ausencia del Estado o por su debilidad, sino por su proceso de formación, por su relación con la sociedad que pretende controlar y por su tipo de vinculación con las distintas formas de control social. En efecto, la diferenciación regional de la violencia, sus modalidades y lógicas de acción se tornan más claras cuando se parte de que el Estado es producto de un proceso diferenciado y gradual de integración territorial y social. Y cuando se recuerda que la construcción del Estado implica una articulación creciente pero desigual entre los poderes locales y regionales.

90 Mary Roldán, 1989. "Guerrillas, contrachusma y caudillos durante la violencia en Antioquia: 1949-1953", en: *Estudios Sociales*, No. 4, FAES, Medellín, p.64, y 1992. *Genesis and evolution of "The Violence" in Antioquia, Colombia*, Tesis doctoral en Historia, Universidad de Harvard.

91 Paul Oquist, 1978. o. c., p. 276.

En contraposición con las interpretaciones que insisten en la violencia como prueba de la debilidad del Estado y de su fracaso en la regulación de la vida social, este texto insiste en la necesidad de articular las manifestaciones explícitas de violencia, el tipo específico de presencia del Estado y la caracterización de la sociedad regional donde la violencia tiene lugar. Es preciso diferenciar, como propuso Oquist, las regiones donde la violencia implica el colapso de una institucionalidad estatal, de aquellas zonas en las que tal violencia alienta y promueve la incursión del Estado mediante el diseño de políticas públicas específicas y la articulación de distintos poderes políticos.

Así las cosas, la diferenciación regional de la violencia obliga a un análisis diversificado de las formas de presencia y de articulación de la dominación estatal. Es preciso insistir en que las dinámicas de violencia se entienden mejor cuando se abandona la comprensión monolítica del Estado que no cumple con sus funciones y se hace énfasis en las distintas formas como el Estado hace presencia en las regiones y en las diferentes características de las sociedades locales con las cuales ese Estado se articula y se encuentra. Por esta vía se hacen más complejas las relaciones entre la violencia y el Estado y se descubre que esta última no es la prueba de su disolución o de su límite. Al respecto cabe recordar una idea de Pécaut, para quien hay un rasgo que distingue la confrontación armada colombiana de otras guerras civiles actuales: "el hecho de que no se puede hablar de un hundimiento del Estado", como ocurre en conflictos africanos, como los de Sudán, Sierra Leona, el antiguo Zaire o Angola, donde la dislocación del Estado, "reducido a no ser más que un actor entre otros, alimenta la generalización de la guerra". En Colombia, aunque el Estado no ejerce plena autoridad sobre vastas porciones del territorio, las reglas del derecho no han perdido totalmente su validez, parte de las instituciones continúa funcionando y se nota un esfuerzo para modernizar las Fuerzas Armadas y reducir sus abusos, a pesar de que sigan presentándose casos de complicidad de sectores políticos y militares con los grupos de autodefensa, lo mismo que aumento de la corrupción y bastante ineficiencia del aparato judicial[92].

En la medida en que la violencia no puede explicarse por la simple destrucción o la falta de presencia del Estado, sino que implica cierta relación conflictiva entre los distintos tipos de regulación y control social, es necesario explicar lo que Pécaut denomina "precariedad del Estado". Al cruzar las referencias a la precariedad del Estado con la insistencia de Oquist y Roldán en el hecho de que una crisis política nacional no se traduce mecánicamente en una crisis política local o en el uso local de la violencia, se evidencia la pertinencia de caracterizar la presencia diferenciada del Estado y sus diversas relaciones con las otras formas de control político en las sociedades locales.

LA PRECARIEDAD DEL ESTADO COMO CONTEXTO DE LA VIOLENCIA

En primer lugar, conviene precisar que Pécaut utiliza el concepto de "precariedad del Estado nacional" en el contexto de su polémica con autores que pretendían explicar la violencia por las limitaciones, implícitas o explícitas, que el Frente Nacional imponía a la vida política colombiana. El carácter restringido de la democracia colombiana hacía que muchos colombianos pensaran que la única opción que quedaba era la lucha armada[93]. Sin negar las evidentes restricciones impuestas por el pacto bipartidista, este autor subra-

92 Daniel Pécaut, 2001. "Prólogo" de *Guerra contra la Sociedad*, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, p.17.

93 Daniel Pécaut, 2001, "Colombia: Violencia y Democracia", publicado originalmente en: *Análisis Político*, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, mayo-agosto 1991, y reproducido en *Guerra contra la sociedad*, antes citada.

ya el carácter que tuvo como pacto pacificador y procedimiento encaminado a impedir el resurgimiento de la guerra entre los dos partidos, cuyos resultados exitosos fueron innegables. Además, muestra que el acuerdo *consociacional* de los dos partidos no ahogó del todo la competencia política sino que trasladó la lucha política al interior de los partidos, al engendrar numerosas facciones que competían por prebendas y empleos. Además, permitía la participación de grupos de izquierda bajo la bandera de un partido tradicional, oportunidad que aprovechó el Partido Comunista para camuflarse bajo las toldas del liberalismo, lo mismo que las disidencias de los partidos, como el MRL y la ANAPO, que canalizarían las expresiones de descontento político y social. Por todo ello, el Frente Nacional era bastante más abierto de lo que suponían las normas constitucionales vigentes. Y, además expresaba bastante bien la persistencia de los partidos tradicionales en la vida política colombiana, que, según Pécaut, va más allá de la manipulación clientelista y de la socialización tradicional, que son también evidentes en la vida política colombiana[94].

Sin negar entonces las limitaciones evidentes de la vida política bajo el Frente Nacional, Pécaut sostiene que "los múltiples espacios que el Frente Nacional y el período posterior dejan abiertos, tanto en el plano político como en el social, son tan significativos como sus restricciones". Para él, el problema real reside en analizar por qué "una movilización política y social evidente" no desemboca "en una expresión política institucional estable", tanto por la inercia de las adhesiones partidarias como por las interferencias de la izquierda con la guerrilla, pues lo que considera explosivo es "esta mezcla de espacios abiertos y de movilización discontinua y dispersa"[95].

En cambio, cree muy discutible explicar la generalización de la violencia por la estrechez del régimen. La experiencia ha desmentido la tesis banal que hace brotar la insurgencia de la falta de canales de participación, lo mismo que el diagnóstico político implícito de esa tesis, que reduce caricaturescamente los enfrentamientos violentos a una simple oposición entre partidarios de reformas democráticas y defensores del statu quo. Por último, su crítica a esta interpretación se centra en que tiende a considerar al Frente Nacional como "el disfraz político de un Estado que controlaría fácilmente a la sociedad". A su juicio, esta consideración significa una oposición a considerar "el factor central de la historia colombiana": "la precariedad del Estado nación", *"que sirve de contexto a la recurrencia de la violencia"*[96].

Según Pécaut, algunos rasgos de esta precariedad, contexto de la violencia generalizada, son universalmente reconocidos por los analistas: todos admiten que la autoridad estatal no se ejerce en vastas porciones del territorio nacional, "en particular en la mayor parte de las zonas de colonización que fueron, con frecuencia, teatro de la Violencia de los años cincuenta y que, marcadas por una rápida expansión desde hace dos décadas, son todavía en buena medida los principales focos de la violencia actual". Sobre todo cuando el Estado no instala en esas zonas de colonización puestos de policía ni equipamiento público, sino que deja "el campo libre al uso privado de la fuerza, así como a organizaciones que, *como los numerosos frentes de las guerrillas actuales, se erigen en instituciones sustitutivas*"[97].

Pero la falta de autoridad estatal en estas zonas, sostiene Pécaut, es solo un aspecto de la precariedad del Estado nación, que reside principalmente en su incapacidad para consolidar su influencia sobre la socie-

[94] Daniel Pécaut, 2001. o. c., pp. 27-32.

[95] Daniel Pécaut, 2001, o. c., p.33.

[96] Daniel Pécaut, 2001. el subrayado es de nosotros.

[97] Daniel Pécaut, 2001, o. c, , pp. 33-34. El subrayado es nuestro.

dad a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, a diferencia de lo que ocurre en otros países vecinos. Esta incapacidad se expresa en que ni la simbología del intervencionismo económico ni la del intervencionismo social encontraron en Colombia las condiciones necesarias para su desarrollo: la economía cafetera que comienza a articular al país al mercado mundial solo se consolida en los años veinte, pero el sector agroexportador colombiano no se vio obligado, como en el Brasil, a recurrir al Estado para limitar sus perjuicios en la depresión de los años treinta. En ese contexto, era más racional para los productores colombianos moverse en una lógica leseferista y aumentar la producción cafetera, ya que el Estado brasileño se encargaba de sostener los precios del café y le ofrecía la oportunidad de aumentar su participación en el mercado. Esta circunstancia hace a las elites económicas colombianas independientes frente al Estado, por lo cual se mostrarán siempre decididas, en nombre del liberalismo económico, "a rechazar toda delegación duradera de poder al Estado en el ámbito de la gestión económica". En lo que respecta al intervencionismo social, que permitió a algunos Estados latinoamericanos controlar a los sindicatos y proclamarse "como portaestandartes del interés general por encima de los intereses particulares", el sentido de las reformas de López Pumarejo fue también diferente ya que ellas no fueron puestas al servicio del la consolidación del Estado sino al de los intentos del partido liberal en el poder para consolidarse en el electorado urbano[98].

Este sentido diferente de las reformas muestra, según Pécaut, otra de las fuentes de la debilidad del Estado: la implantación de los partidos tradicionales, que hacen que el cuerpo social aparezca "definitivamente dividido entre estos dos partidos que son también subculturas", que definen, cada uno por su cuenta, el contenido de las identidades colectivas. Lo que no deja lugar "ni para una imagen de Nación unificada ni para un Estado independiente de los partidos". Sobre estas bases avanzó la sociedad colombiana en el siglo XX, "sin que las estructuras y la concepción del Estado hayan sido profundamente alteradas"[99].

En otro de sus artículos[100] Pécaut amplía este aspecto del tema de la precariedad del Estado al señalar que "la unidad simbólica de la nación" apenas si tenía oportunidad de ser reconocida, "con una sociedad dividida y fragmentada, con un Estado sin autoridad", ya que "el pluralismo de los partidos y de sus facciones que hacían las veces de democracia, no bastaba para suscitar un sentido de una ciudadanía común y menos todavía el de un espacio común de arreglo de los conflictos". En ese contexto, caracterizado en otro capítulo del mismo libro por "la fragmentación del territorio, la multiplicidad de polos urbanos y el mantenimiento de innumerables zonas sustraídas al control del Estado", las prácticas políticas se construyen "más sobre las bases de las transacciones y conflictos entre los poderes de diversos niveles, que por referencia a la simbología nacional"[101]. De ahí la persistencia del estilo clientelista del quehacer político y los obstáculos para el desarrollo de un movimiento populista referido a la unidad simbólica de la nación y al intervencionismo del Estado en materia de desarrollo económico y bienestar social. Por eso, el populismo gaitanista nunca llegó a formular una mística nacionalista ni a romper con el Partido Liberal, mientras los gremios económicos lograron hacer respetar siempre un estilo ortodoxo de política económica.

98 Daniel Pécaut, 2001, o. c, pp.34-35.

99 Daniel Pécaut, 2001. o. c., p.35.

100 Daniel Pécaut, 2001. "Presente, pasado y futuro de la violencia", publicado originalmente en *Análisis Político*, No. 30, IEPRI, Universidad Nacional, enero- abril 1997, y reproducido en *Guerra contra la sociedad*, antes citado, p.114.

101 Daniel Pécaut, 2001. "Populismo imposible y Violencia", publicado originalmente en: *Estudios Políticos*, No.16, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-junio del 2000, y reproducido en *Guerra contra la Sociedad*, antes citado, p.55..

Esta situación de precariedad del Estado, sostiene el autor, representó ventajas y desventajas: por una parte, contribuyó a la continuidad de las formas democráticas al privar de punto de apoyo a intervenciones militares o a tendencias civiles autoritarias e hizo difícil el desarrollo de populismos políticos y económicos. Pero, por otro lado, este contexto político y económico permitió "a los partidos tradicionales entregarse a regateos que no les permiten concebir casi ningún proyecto nacional", mientras que el reparto de todas las instituciones estatales entre las corrientes y subcorrientes de los partidos impidió "cualquier modernización significativa del Estado"[102].

Con respecto a la relación entre precariedad del Estado y violencia, la posición de Pécaut es muy clara, cuando afirma que esta precariedad "*permite*" que aflore sin cesar "una violencia multifacética", ya que "la carencia de una simbología de la unidad nacional, la ausencia de mecanismos constantes de regulación social, el fraccionamiento espacial de los poderes"(..)"ponen al descubierto una conflictividad que circula libremente a través del tejido social". En algunos momentos, como antes del Frente Nacional, esta conflictividad revestía "un carácter predominantemente político": entonces "el cuerpo social" aparecía "naturalmente dividido entre las dos comunidades partidarias". Bajo el Frente Nacional esta conflictividad se torna más compleja pues el arreglo bipartidista no se concibe "como una redefinición de la colectividad nacional" sino "como una fórmula de transacción transitoria" para evitar que la violencia pueda repetirse: esto hacía que se agitara con frecuencia la necesidad de mantener la coalición bipartidista. El procedimiento expresaba, obviamente, el sentir de los que habían vivido, directamente o no, la experiencia de la Violencia[103].

En otras ocasiones, afirma Pécaut, la conflictividad atraviesa las relaciones sociales: el Frente Nacional se constituye en un momento marcado "por la desorganización de las clases populares surgidas de la Violencia", cuando el campesinado había sufrido asesinatos masivos y enormes desplazamientos y la clase obrera había sido separada de sus antiguos sindicatos. Por su parte, el Frente Nacional no se esforzó por crear "mecanismos de mediación institucionalizada" sino que quiso prolongar esa situación de desorganización que le servía para mantener, bajo la tutela de los dos partidos, a las organizaciones que se estaban reconstituyendo. Además, abandonó a su suerte los conflictos rurales, donde la solución violenta se hizo frecuente, ya que muchos de sus protagonistas consideraban como recurso legítimo los asesinatos a sueldo y la "autodefensa"[104].

Por otra parte, para Pécaut, el fraccionamiento espacial también ayuda a "esta conflictividad difusa o abierta". Desde la Violencia de los cincuenta, las luchas se desarrollaban en "una pluralidad de espacios inconexos", pero hasta hoy sigue prevaleciendo el fraccionamiento espacial de las luchas sociales, que explica "los límites de esta movilización social fragmentaria y poco organizada" y "la eventual violencia de choques encerrados en su aislamiento"[105]. Además, insiste este autor, la precariedad del Estado mantiene "un abismo entre la protesta social y la protesta política". La experiencia de otros países de América Latina muestra que el surgimiento de actores sociales estables, con influencia política, se produce cuando el Estado se presenta como interlocutor central ante ellos, sea para cooptarlos o para insertarlos en un sistema semicorporativista. En cambio, en el contexto colombiano los movimientos sociales y las vanguardias radicalizadas se encuentran por breves momentos pero se separan luego, ya que la impaciencia e intransigencia de las vanguardias producen el repliegue o la dislocación de los movimientos sociales[106].

102 Daniel Pécaut, 2001. "Colombia : Violencia y democracia", en: *Guerra contra la sociedad*, antes citada, pp. 35-36.

103 Daniel Pécaut, 2001. o. c., p. 36.

104 Daniel Pécaut, 2001. o. c., pp. 36-37

105 Daniel Pécaut, 2001. o. c., p. 37.

106 Daniel Pécaut, 2001. o. c., pp. 37-38.

En este contexto, Pécaut discute el caso de la relación entre la persistencia de los grupos campesinos de autodefensa, creados por el Partido Comunista durante la Violencia de los años cincuenta, y su posterior integración a las FARC, que no evocaría un abismo entre lo social y lo político sino más bien "su perfecta fusión". Sin embargo, a él le parece "una ilusión" analizar las guerrillas actuales como "una generalización de los grupos de autodefensa", pues ellos nunca lograron pasar de un número reducido de familias campesinas que querían sobrevivir, muy distintas de las guerrillas posteriores, "que obran como si el problema del poder estuviera ya planteado". Por todo esto, Pécaut concluye que el término de "precariedad del Estado"ofrece una explicación mejor del fenómeno de la violencia que el de "democracia restringida", e insiste en señalar que hay discontinuidades muy significativas entre la violencia actual y la del Frente Nacional[107].

Así pues, el concepto de precariedad del Estado utilizado por Pécaut recoge distintos elementos, cuyo punto central es el tipo de relación que se establece entre Estado y sociedad en Colombia. De ahí que el autor examine el papel de los partidos políticos tradicionales en la articulación de la sociedad colombiana, la escasa presencia de las instituciones estatales en las zonas periféricas de frontera, pero también, y de manera sobresaliente, las dificultades que enfrenta el Estado para consolidar su influencia sobre la sociedad.

La reconstrucción minuciosa de los planteamientos de Pécaut sobre la precariedad del Estado permite situar la pregunta en torno al desarrollo de la violencia no en una "esencia fallida" del Estado sino en su dinámica de relacionamiento con la sociedad: así, nos interesa resaltar que la violencia no se produce por "falta de Estado", ni por exceso de él, sino por unas conflictivas relaciones entre Estado y sociedad. Más aún, es interesante el argumento, sostenido por este autor, de que la precariedad del Estado y el consiguiente desarrollo de distintas dinámicas de confrontación armada tienen como correlato los problemas de articulación entre las demandas sociales y su representación política. La insistencia de Pécaut en la "conflictividad desagregada" que cruza el cuerpo social, lo mismo que en los desencuentros y ambigüedades que caracterizan las relaciones entre actores sociales y políticos, plantean dos importantes problemas que serán retomados más adelante y que constituyen nexos centrales entre el Estado y el desarrollo del conflicto armado. Los planteamientos de Pécaut hacen necesario preguntarse cuando y por qué la conflictividad social empieza a concentrarse y a ser representada políticamente, lo que lleva a una pregunta posterior sobre cuál es el vínculo histórico entre movimientos sociales y Estado y entre política y violencia.

La pregunta por el vínculo o la diferenciación entre política y violencia supone la identificación del momento en que la violencia se convierte en un fenómeno social diferenciable del conjunto del resto de las relaciones sociales. Esta diferenciación se refleja en una concepción de la política que excluye ya el recurso a la violencia de su repertorio de acciones posibles. En el siguiente capítulo se analizará este punto con mayor profundidad. Pero los planteamientos desarrollados antes nos llevarían a una necesaria revisión de la idea de la política como actividad esencialmente pacífica para analizar en qué momento ella se separa de ese recurso a la violencia. Normalmente, como aparece en Anthony Giddens[108], la categoría de "violencia política" se refiere a la violencia represiva ejercida por el Estado contra ciertos actores sociales o políticos, o a la violencia subversiva de insurgentes que quieren tomarse el poder del Estado. En ambos casos, se supone un Estado previamente consolidado y claramente diferenciable de la sociedad. En cam-

107 Daniel Pécaut, 2001, o. c., p.38.

108 Anthony Giddens, 1994. "La teoría política y el problema de la violencia" en *Más alla de la izquierda y la derecha*, Editorial Cátedra, Madrid.

bio, la experiencia de la violencia colombiana no se agota del todo en las violencias represiva y subversiva, sino que tiene muchas veces que ver con los procesos de articulación estatal de redes de poder previamente existentes o con los desarrollos de la configuración de esas redes. Por eso, los trabajos de Daniel Pécaut son muy útiles cuando invitan a considerar los fenómenos violentos en el marco de las relaciones entre Estado y sociedad, lo que nos conduce a la necesidad de plantear este tema de manera diferenciada en el espacio y en el tiempo.

HACIA UNA LECTURA DE LA VIOLENCIA DESDE LA PRESENCIA DIFERENCIADA DEL ESTADO EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO.

Las precisiones de Oquist sobre el "colapso parcial del Estado", junto con las diferenciaciones que introduce Roldán en torno a los distintos tipos de violencia que tienen lugar en municipios integrados y municipios de frontera, y la manera como Pecaut caracteriza la precariedad de la presencia de las instituciones estatales en zonas periféricas o de frontera, implican el reconocimiento de cierta presencia diferenciada del Estado en regiones y localidades. Pécaut insiste en la existencia de territorios amplios sin control del Estado, mientras que Oquist y Roldán señalan que el colapso de las instituciones estatales en algunas áreas no significa necesariamente la pérdida de la regulación política y social, ya que ésta puede ser suplida por mecanismos internos de control, de carácter no estatal. Además, la diferencia que introduce Roldán en la manera diferenciada como el Estado confronta la violencia según las modalidades de mayor o menor presencia de los partidos tradicionales en la integración de regiones y localidades sugiere pistas importantes sobre la manera indirecta como el Estado hace presencia en ellas. Roldán recuerda que en las zonas de frontera donde la dominación partidista es debil, el Estado confronta directamente la violencia enviando tropas. Por el contrario, en los municipios más integrados delega en los mecanismos de los partidos tradicionales el manejo de la violencia . En estos últimos el conflicto se produce en torno al reparto de la burocracia y no tiene otros componentes adicionales, como la disputa por la tierra.

En correspondencia con este carácter diferenciado de la presencia de las instituciones estatales según las características de las diversas regiones, habría que señalar, igualmente, el hecho de que la violencia política también reviste características diversas en las regiones según sea su relación con esas mismas instituciones, como se ha venido ya insinuando a lo largo de este capítulo. Esta diferenciación de formas de la Violencia es corroborada por el análisis de Malcolm Deas, que subraya que buena parte del conflicto armado se desarrolla en regiones donde el Estado no puede reclamar el monopolio de la fuerza y donde, por consiguiente, la lucha de la insurgencia no enfrenta propiamente al Estado sino a grupos rivales que buscan el control del territorio[109]. Además, Deas refuerza esta afirmación con la idea de la poca deferencia de la población colombiana frente a la autoridad y de la debilidad de las instituciones.

Tanto este autor como otros investigadores han insistido en que parte importante de la historia de la violencia en Colombia tiene que ver no tanto con las desigualdades y la injusticia social, sino sobre todo con el hecho de que la sociedad colombiana "ofrecía más movilidad, estaba menos estratificada en

[109] Malcolm Deas, 1995. "Canjes violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia", en: Malcolm Deas y Fernando Gaitán Daza, 1995. *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Fonade y Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

castas que sus vecinas", como se evidencia en la pronta vinculación de los mestizos a la política local y en el dinamismo social asociado a ello[110]. En efecto, una menor jerarquización social implica la inexistencia de un dominio estratificado y de la sedimentación de una clase hegemónica en algunas regiones. Y esa inexistencia implica que la sociedad permanece abierta al conflicto local por la definición de preeminencias y hegemonías. Refiriéndose a la sociedad colombiana contemporánea, otros autores insisten en la movilidad geográfica y socioeconómica de las poblaciones y en los permanentes flujos sociales que cruzan distintas territorialidades[111]. Para Pécaut, Colombia ha sido siempre un país de fronteras. Hay zonas de colonización permanentes donde la violencia se expresa de manera recurrente, que hacen preciso distinguir entre fronteras internas y fronteras periféricas[112]. Esa vida social de frontera, esa constante movilización de los grupos sociales, la existencia de territorios hacia donde huir de la dominación permiten que no se sedimente un tipo de dominio, lo que, al mismo tiempo, condiciona y restringe la acción de los grupos armados.

En esa misma línea, distintos estudios han encontrado que los municipios más violentos son aquellos cuyos procesos de colonización se hallan en marcha o que son contiguos a una subregión también de colonización. En estos casos, señalan algunos autores,"los actores armados tiene a su favor la gran fragmentación de las sociedades locales", la desregulación política local, la disolución de algunos de los vínculos de cohesión existentes en las sociedades de origen. Ante esa situación, se busca fundamentar el control en el desarraigo y el miedo[113]. Los procesos de ocupación de la tierra y de establecimiento de nuevas relaciones se hacen siempre en una temporalidad que se percibe en disputa. Los colonos no pueden asentarse, y son conscientes de que están de paso en ese territorio, lo que hace que su destino sea incierto[114]. Por su parte los actores armados potencian la indefinición acerca del estatus de la tenencia de la tierra, de los límites territoriales y de aquello que se puede o no hacer, al tiempo que son debilitados por esas mismas dinámicas[115]. En términos de Echandía, "la precaria presencia del Estado" (discutida antes) dificulta la vinculación del colono a la tierra, conformándose una economía parcelaria itinerante que a la vez que ensancha la frontera agrícola favorece el latifundio ganadero"[116].

Por eso, es necesario repensar qué tipo de jerarquías sociales se inventan en las sociedades locales de reciente configuración, cómo se sedimentan unas relaciones de dominación y no otras en las distintas zonas de colonización. Esta construcción de lazos de cohesión y jerarquización social obligar a pensar en una dinámica social y política específica que, en ausencia de un mejor nombre, se ha titulado "*dominación política no sedimentada*". Tal concepto expresaría los procesos de construcción de un poder político

110 *Ibídem*, pp. 25-26.

111 Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz, 1999. o. c., p 237.

112 Daniel Pécaut, 1997. "Presente, pasado y futuro de la violencia", en: *Análisis Político*, No. 30, IEPRI, Universidad Nacional, pp 9-12.

113 Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya, y Carlos Miguel Ortiz, 1999. o. c., p 239.

114 Daniel Pécaut 1999. "Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano", en: *Revista Colombiana de Antropología*, vol 35, p. 15 y ss.

115 Fernando Cubides, 1999. "Los paramilitares y su estrategia", en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente, editores, 1999. *Reconocer la guerra para construir la paz*, Cerec, Ediciones Uniandes, Grupo editorial Norma, Bogotá, p. 171.

116 Camilo Echandía, 1999. "Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia", en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente, 1999. o. c., p. 132.

local y de una comunidad política en zonas de frontera. Lo que equivale a la configuración de un dominio local directo en regiones abiertas a la colonización, donde la guerrilla juega un papel fundamental al constituirse como red de dominio local, pero sin articularse con el Estado pues pretende "acabarlo" y reemplazarlo. Pero esta configuración no puede ser pacífica. De un lado enfrenta los esfuerzos paramilitares por impedir el dominio directo de la guerrilla en lo local, para así fortalecer su posición frente a ella. De otro, enfrenta los intentos de centralización política por parte del Estado central, cuyas instituciones tratan de establecer una presencia de tipo burocrático en esas áreas.

Distintos analistas, entre ellos, Clara Inés García, han llamado la atención sobre el tipo de dominación política y, más exactamente, sobre el tipo de Estado que se puede construir en las zonas donde no se ha definido todavía el estatuto de la tierra ni el marco legal que ampara las distintas relaciones sociales. A partir del estudio de Urabá, esta autora sostiene que los conflictos regionales y las tensiones entre distintos grupos sociales no deben pensarse siempre y necesariamente "como producidos por un papel fallido del Estado". Más bien, se trata de pensar cómo se evidencian maneras de ser y de construir el Estado mismo a partir de esos conflictos, cómo se configura allí un Estado que no existía previamente y cuyos aparatos tampoco pueden llegar simplemente a imponerse en la región[117].

Este problema no es debido simplemente a la falta de voluntad política o de interés por parte de los funcionarios estatales sino que expresa una situación social, donde no existen todavía los lazos de interacción e interdependencia sociales que sirvan de base a la consolidación de un dominio hegemónico de un actor social, político o militar en una región determinada. Ya que, como se verá más adelante, la constitución del monopolio de la violencia y el afianzamiento de la soberanía están esencialmente ligados a la existencia de situaciones de creciente interdependencia, que tienen que ver con la consolidación y definición de los límites territoriales, la extensión de medios de transporte y comunicación, la división social del trabajo y el consiguiente tránsito entre economía natural y economía monetaria, asi como con el crecimiento de la comercialización. La configuración de los monopolios de violencia y fiscal tienen que ver con la vinculación de los distintos integrantes del entramado social a largas cadenas de dependencia funcional, donde cada vez más la fuerza social de un sector depende de su articulación con los otros. Todo esto delimitado y encerrado en un territorio determinado, ya que la consolidación de una dominación sedimentada supone "el enjaulamiento" de una sociedad en un territorio que se conoce, que se mapea, y donde se puede controlar a la población. Esta condición, como se verá más adelante, es difícil de cumplir en el caso colombiano, por la existencia de fronteras "abiertas" y territorios hacia los cuales puede huir la población, lo que evita la sedimentación del orden y del control mediante lo que algunos llaman una "adaptación en resistencia". Esto hace que el orden continúe siendo "volátil", para seguir los términos usados por María Teresa Uribe.

Esta lucha entre actores que pretenden imponer su hegemonía en una localidad o región donde no existe todavía la "dominación sedimentada" de las elites, contrasta con el estilo de la confrontación armada que se presenta en zonas donde ya existe un grupo dominante más o menos consolidado, más o menos articulado al Estado por medio de las redes de los partidos tradicionales. Como se mostraba atrás, la guerrilla se consolida como red de poder local que articula una comunidad política y representa un nivel incipiente de centralización política en las zonas de colonización abierta o interna. La multiplicación de los frentes de las FARC y el ELN significó, desde comienzos de los ochenta, una expansión de los grupos guerrilleros hacia territorios distintos de sus nichos originales en áreas de colonización campesina, lo mismo que la

117 | Clara I. García, 1996. *Urabá. Región, actores y conflicto.1960-1990*, INER-CEREC, Bogotá..

ruptura de su estilo original de territorialidad. Y también expresó su decisión de priorizar su implantación en los principales polos de producción de bienes primarios para conseguir abundantes recursos financieros mediante la extorsión[118]. Esta decisión trajo cambios radicales en su acción y mostró una tendencia creciente a privilegiar la dimensión militar sobre la societal.

Esta expansión militar de la guerrilla se facilita en las zonas donde se está debilitando el dominio partidista como articulador de la relación con el Estado central, pero este avance no la convierte tampoco en una forma alternativa de comunidad política subordinada a los aparatos estatales. Este debilitamiento puede deberse a problemas políticos o económicos, como se evidencia en el eje cafetero, severamente golpeado por la caída de los precios del café en el mercado mundial, que afecta la intermediación de la anteriormente poderosa Federación de Cafeteros y facilita el avance insurgente en una zona antes considerada inmune a su penetración. Allí la expansión de las guerrillas es un correlato de la crisis del modelo de integración de esas regiones con el país y de las transformaciones tanto del cultivo como del estilo de presencia de la Federación y otras entidades estatales.

En esas áreas, donde se percibe el debilitamiento de los poderes locales, los actores armados buscan penetrar las administraciones locales y "tutelar" de alguna manera su funcionamiento para acceder a sus recursos fiscales. Algunos analistas han interpretado esta transformación de la insurgencia como una renuncia a su interés por transformar el Estado para contentarse con una serie de acuerdos con los políticos locales. Para otros, como Alfredo Rangel, la estrategia guerrillera encaminada a copar los poderes locales buscaba resolver la contradicción de su "gran solidez económica y una indiscutible y creciente capacidad militar" con "una inmensa debilidad en su capacidad de convocatoria política nacional". Para ello, las guerrillas aprovecharon los espacios abiertos por la descentralización que empezó a desarrollarse desde mediados de la década de los años ochenta. En esto fue pionero el ELN, que resolvió que "si las alcaldías y concejos municipales iban a administrar recursos del petróleo, pues había que meterse en las administraciones locales"[119].

En ese sentido, Rangel muestra cómo se inserta la guerrilla en el proceso político local mediante la protección de los candidatos que han hecho acuerdos con ella, el amedrentamiento de los que se han negado a ello, la "tutela" y vigilancia sobre las administración de los funcionarios elegidos, la orientación del gasto público local y del reparto burocrático. Es diciente su conclusión de que, en esencia, "las funciones clientelistas y gamonalicias", que por la vía del terror ha llegado a desempeñar la guerrilla en algunas regiones, no difieren "de las que siempre han ejercido las elites políticas tradicionales en las localidades"[120]. Incluso, estas formas "tradicionales y premodernas de hacer política" se realizan a veces "en conjunción de los viejos caciques políticos de las localidades". En el mismo sentido, Camilo Echandía señala que las guerrillas"han logrado acceso a los recursos públicos de las administraciones locales y departamentales mediante acuerdos con funcionarios corruptos"[121].

La referencia más articulada a este fenómeno la provee Peñate, cuyos planteamientos se reseñaron antes. El autor se mostraba sorprendido por la asimilación insurgente de prácticas tradicionales de acción política

118 Daniel Pécaut, 1999. o. c., pp. 232.234.

119 Alfredo Rangel, 1999. "Las FARC-EP: una mirada actual", en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente, 1999. o. c., p. 36.

120 Alfredo Rangel,1999. o. c., pp. 35-37.

121 Camilo Echandía, 1999. "Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia", en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente, 1999. o. c., p. 136.

que son señaladas como "corruptas", propias de un "clientelismo armado". Como descripción, esos señalamientos son exactos, pero pasan por alto el contexto- la "estructura de oportunidades"- donde se mueven estos actores y las dinámicas sociales y políticas a las que responden. Así, hemos mostrado antes que Palacios llama la atención sobre el hecho de que la guerrilla se apoya "en redes clientelares adecuadas a la jerarquización empírica de la sociedad rural...", basadas en la familia como "la unidad política básica y no el individuo"[122] Al mismo tiempo, su insistencia en la necesidad de estudiar los vínculos "entre la expansión guerrillera y las dinámicas cotidianas de compadrazgos, amistades y odios entre familias y veredas"[123], nos lleva a recordar el peso de tales amistades y odios como formas de filiación y los tipos de relación política constitutivos del bipartidismo[124]. Así pues, la creciente participación de los actores armados en el poder local y su uso de la coerción para producir filiaciones políticas revelan el tipo de lucha política que es posible mantener en un Estado, cuyas instituciones deben estar negociando continuamente con los poderes locales y regionales previamente existentes o en proceso de consolidación en las regiones y localidades.

Por ello, no se podría afirmar tajantemente que a los actores armados no les interesa ya el poder político porque ya han "perdido sus ideales". Más bien, se trata de mostrar que las modalidades del comportamiento de los actores armados se diferencian según el tipo concreto de relación que tienen las poblaciones de las regiones con las instituciones estatales *realmente existentes* en ellas. La diferencia entre la imagen modélica del Estado y la forma como funciona en las regiones permite problematizar aquellas perspectivas que hacen girar la violencia política principalmente "alrededor del control territorial y la competencia sobre pequeñas porciones de geografía política, una finca, un barrio, una región". Según esta perspectiva, la antigua dinámica de la insurgencia izquierdista que se dirigía contra el Estado ha dado paso cada vez con más frecuencia a "un choque de múltiples actores que rivalizan por el control estratégico de territorios locales"[125]. Aquí no se pone en duda el carácter estratégico de ciertos territorios en disputa, sino que se pretende llamar la atención sobre dos hechos. Primero, los actores armados no enfrentan un Estado centralizado que cuenta con dominio directo en las regiones, lo que implica modificaciones de las condiciones del enfrentamiento. Y, esto significa, en segundo lugar, que el intento de control de los actores armados sobre ciertos territorios no implica desentenderse del enfrentamiento con el Estado, sino pelear con él desde nuevos lugares, de acuerdo al estilo de presencia que tienen sus instituciones en las regiones en disputa.

Al respecto resulta pertinente el comentario de Castaño sobre su injerencia en la política: "sin la política no se puede consolidar ningún territorio ni cerrar la puerta a la guerrilla... En mi zona tenemos 160 acciones comunales controladas cuyos integrantes votarían por el candidato que señaláramos. Sería una irresponsabilidad nuestra no orientarlos o decirles cuál es el menos corrupto, el que sirve"[126]. Y frente al interrogante sobre el tipo de relaciones que mantienen las autodefensas con las autoridades locales, Castaño sugiere

122 Marco Palacios, 1999. "La solución política al conflicto armado:1982-1997", en: Alvaro Camacho y Francisco Leal, editores, 1999. *Armar la paz es desarmar la guerra*, IEPRI, Fescol, CEREC, Bogotá, p. 381.

123 Marco Palacios, *Ibidem*. En una dirección similar se orientan los planteamientos de Deas para quien "la filiación política afecta el sentido de la familia, la identidad local, la identidad personal y el compromiso ideológico". Véase: 1995. "Canjes violentos. Reflexiones sobre la violencia política en Colombia", en: *Dos ensayos especulativos sobre la violencia colombiana*, antes citado, p.28.

124 Fernán González, 1997. "Aproximación a la configuración política de Colombia", en: 1997. *Para leer la Política*, CINEP, Bogotá.

125 Marc Chernick, 1999. "La negociación de una paz entre múltiples formas de violencia", en: Francisco Leal Buitrago, editor, 1999. *Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz*, Tercer Mundo editores, Uniandes, Bogotá, p. 7.

126 *Cambio 16*, No. 237, 29 de diciembre de 1997.

trasladar la pregunta a los alcaldes: no se trata de responder para qué le puede servir un alcalde a la autodefensa, sino que los alcaldes digan para qué les sirve a ellos la autodefensa, porque el papel de ella es apoyarlos "respecto de su seguridad en las zonas. Cómo no podríamos tener relación, por ejemplo, con el alcalde de... donde la autoridad somos nosotros. Él dice 'no se lleve la gente porque se mete la guerrilla' y si él solicita al Estado que le envíe la policía. Apoyamos autoridades civiles para que puedan ejercer funciones, somos vigilantes, fiscales, lo que no los dejamos es robar"[127].

Estas afirmaciones muestran la otra cara de la moneda: la resistencia que el avance insurgente encuentra en esas zonas articuladas al Estado por la vía de los gamonales ligados a las redes del bipartidismo. Allí los paramilitares representan, en términos muy amplios, un esfuerzo por reestablecer el dominio político tradicional, esto es un dominio directo de la población local por parte de los sectores establecidos y que sirve de base para una articulación con el Estado central. En ese interés por restablecer la dominación de las redes bipartidistas de poder y de reconstruir las jerarquías políticas tradicionales, los grupos paramilitares combinan distintas estrategias, similares a las de la guerrilla. El control de las autoridades locales, la orientación del gasto público municipal, el patrocinio de organizaciones sociales tuteladas por ellos, entre otros[128]. Pero, además, como se ha visto, los paramilitares también expresan la resistencia contra los esfuerzos de centralización política impulsados por el Estado central, que pueden debilitar las redes locales y departamentales de poder, lo que termina abriendo el camino a la vinculación política de distintos grupos poblacionales a la guerrilla o las autodefensas

Así pues es preciso reseñar las condiciones políticas que permiten hablar de una mayor o menor maleabilidad de los órdenes locales, pues la guerrilla interviene de formas distintas en las diversas zonas y pone en marcha distintos tipos de relacionamiento político en ellas para tratar de socavar los vínculos políticos que sostienen la dominación de una red política particular. En cierto sentido, la guerrilla presiona la desarticulación de los intermediarios y el Estado central, pero resulta paradójico que su discurso sobre el abandono del Estado se haga desde una imagen modélica de lo que él debería ser. Los grupos guerrilleros afirman estar luchando contra el Estado centralizado, que quieren sustituir, pero su acción cotidiana los enfrenta, la mayoría de las veces, con el Estado mediatizado por las redes de poder local. En otras palabras, gran parte del discurso guerrillero y de su forma de pensar el Estado se basan en el modelo del Estado moderno, que es claramente diferenciable de la sociedad, pero lo que las guerrillas enfrentan es una forma bastante difusa de poder político, un Estado que no acaba de diferenciarse de la sociedad. Al tiempo que esa sociedad aparece colonizada y organizada a través de distintas redes políticas[129].

En resumen, la dinámica del conflicto armado y el desarrollo de la descentralización han cambiado las relaciones de los grupos armados con las localidades y regiones: *Algunos grupos guerrilleros se han convertido en redes de poder local, en formas de dominio directo sobre la población local porque es la única forma de penetrar al Estado, de ganar un lugar político y de tramitar ciertas pautas de identidad colectiva rural. Por el otro lado, pero en el mismo esquema, los grupos paramilitares intentan reestablecer la dominación tradicional de la que habían sido desplazados por la acción insurgente y por los programas de desregulación económica puestos en marcha por parte del Estado central. O sea, que tanto guerrilla como*

127 *El Colombiano*, 11 de diciembre de 1996, p. 7 A.

128 Manuel Alberto Alonso, 1997. *Conflicto armado y configuración regional: el caso del Magdalena medio*, Universidad de Antioquia, Medellín, p.49.

123 Daniel Pecaut, 1999. "Estrategias de paz en un contexto de diversidad de actores y factores de violencia", en: Alvaro Camacho y Francisco Leal , editores, 1999. *Armar la paz es desarmar la guerra*, IEPRI, Fescol, CEREC, Bogotá, p. 225.

paramilitares juegan en un escenario definido por la dominación de las redes de intermediarios porque esquemas políticos como el de Estado-oposición no funciona en un contexto en que Estado y sociedad aparecen perfectamente mezclados. Ahora bien, mientras los paramilitares tienden a reestablecer la dominación tradicional, la guerrilla, aún cuando participa de este estilo de dominación indirecta expresa un proyecto de centralización política, de integración territorial.

Por ello, el mapa del conflicto armado debe leerse diferenciadamente, para establecer dónde el conflicto armado se configura como "instrumento o mecanismo de construcción nacional", al expresar la lucha por la integración de una región o un segmento social en una unidad más grande. Ahora bien, esta lucha puede ir del centro a la periferia o de la periferia al centro. Hay que preguntarse también por los conflictos que el Estado central genera cuando interviene por medio de reformas que tienden a desarticular el dominio de las redes preexistentes, donde la violencia compromete la expansión de un proyecto de modernización económica y política de cualquier cuño y rechaza las tendencias a la integración que el mismo Estado produce. Pero también hay que reconocer los conflictos producidos por una periferia que quiere integrarse, que quiere vincularse al centro pero sin asumir los costos de ser regulada o controlada.

Pero, de otro lado, es preciso establecer también dónde el conflicto armado no se inserta en la construcción de la nación sino que expresa la definición de los límites territoriales y hegemonías, el acomodamiento y la lucha entre identidades locales y vínculos comunitarios que buscan el establecimiento de un dominio local directo en los ámbitos regional y local. Este es el caso específico de las zonas de colonización apenas son abiertas y/o cuando están en auge. Todas estos interrogantes señalan las tensiones que se producen cuando las instituciones del Estado tratan de establecer relaciones directas con los pobladores e intentan superar la intermediación de los poderes locales y regionales. La clave sería entonces es situar el conflicto armado interno en el contexto de las luchas de integración que se reflejan en la constitución del monopolio estatal de la violencia legítima, que es desafiado tanto por los actores armados como por los poderes de hecho existentes en localidades y regiones.

Sólo si se tiene en cuenta ese mapa diferenciado de las luchas de integración que dan sentido al conflicto, puede entenderse que así como los partidos políticos cubren y disfrazan políticas las afiliaciones adscriptivas, heredadas, las rencillas personales y comunitarias bajo las identidades políticas, el conflicto armado puede hacer aparecer como una disputa por el poder nacional las tensiones asociadas a la integración territorial y socioeconómica, lo mismo que las tradicionales rivalidades regionales y locales"[130]. En ese sentido, tanto las autodefensas como las guerrillas pueden estar recogiendo y expresando, en sus enfrentamientos, guerras internas entre familias, enfrentamientos entre veredas y municipios, luchas entre diversos grupos sociales, junto con prácticas reguladoras de la convivencia mediante la aplicación de castigos bastante drásticos. Pero estos procedimientos no se diferencian tanto de la manera como se fueron consolidando los instrumentos de cohesión y jerarquización de los gamonales tradicionales ligados al bipartidismo. Esto es recordado constantemente por Daniel Pécaut, que muestra que estas dinámicas de "territorialización bajo coacción" no son algo específico del conflicto armado actual, sino que había sido puesta en marcha ya por los partidos políticos. Con las diferencias obvias: los niveles de coacción armada eran talvez un poco menores y esa forma de territorialización funcionaba entonces como una modalidad de integración a la nación[131].

130 Ingrid Bolívar, 1999. "Sociedad y Estado: la construcción del monopolio de la violencia", en: *Controversia*, No.175, CINEP, Bogotá, diciembre de 1999.

131 Daniel Pécaut, 1999. "Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto del terror: el caso colombiano", en: *Revista colombiana de Antropología*, No.35, enero-diciembre de 1999, reproducido en 2001. *Guerra contra la sociedad*, ya citado.

De ahí que algunos analistas hayan mostrado la manera como el desarrollo del conflicto armado ha venido incidiendo en la integración territorial de distintos espacios a la nación, al producir una creciente interrelación entre las regiones y sus poblaciones, que logran ahora mayor participación en las redes de relaciones que articulan lo que se denomina el territorio nacional. Este proceso de integración al tiempo que "homogeniza" los distintos espacios, los hace visibles y particulares para otros grupos poblacionales. En efecto, la configuración del Estado implica "el enjaulamiento" de las relaciones sociales en un espacio territorial que también es producido por ellas y donde se redefinen los anteriores límites[132]. La dinámica territorial implicada en la construcción del Estado nación queda bien recogida en la idea de Colmenares: "el estudio de la formación nacional... podría consistir en indagar qué formas tomó la incorporación de nuevos espacios y de nuevas masas humanas y de qué maneras transformaron los viejos recintos coloniales"[133].

Así, puede afirmarse que ciertos dinamismos del conflicto armado interno pueden convertirse en mecanismos de construcción nacional cuando han permitido, y a veces hasta forzado, la incorporación de nuevos espacios y nuevos grupos poblacionales al conjunto del "territorio nacional". En ese sentido, conviene recordar que gran parte de los territorios que fueron escenarios de la violencia de los años cincuenta hoy están integrados a la nación Y lo mismo puede proyectarse hacia el pasado, desde los tiempos coloniales, cuando los funcionarios españoles se quejaban de la violencia de los "pueblos revueltos", que hoy son bastante pacíficos, hasta los territorios que fueron escenarios de las guerras civiles del siglo XIX y las conflictivas regiones de la colonización antioqueña del mismo siglo.

El señalamiento de estos procesos de integración e incorporación a la vida nacional no implica ocultar las desigualdades y las jerarquías que caracterizan la articulación de las regiones con la sociedad nacional. La integración territorial es de carácter asimétrico y tiende a subordinar algunas localidades. Lógicamente, el desarrollo desigual de las regiones y la configuración de jerarquías sociales como base de los poderes consolidados en los espacios regionales se traduce en una incorporación también subordinada de diferentes grupos poblacionales en el concierto de la nación.

Esta dinamización de la integración territorial impulsada por el desarrollo del conflicto armado puede ser ilustrada por el trabajo de Clara Inés García sobre el bajo Cauca antioqueño. La autora subraya el papel que jugaron allí los actores armados para delimitar el territorio y llamar la atención de la administración departamental sobre él: quienes "cumplen con la función histórica de sentar las bases espaciales y socio-políticas de la primera delimitación de un territorio con sabor a región son los actores armados"[134]. La autora muestra que el desarrollo del conflicto armado movilizó distintos grupos sociales para la construcción de una identidad regional y presionó, al mismo tiempo, la constitución de una dirigencia local y el crecimiento de la acción colectiva en la subregión. Ahora bien, la guerra no sólo transformó las relaciones dentro de la región, sino que incluso proyectó su presencia en el resto del país: "El territorio llamado Bajo Cauca adquirió identidad para el resto de los colombianos a través de la guerra"[135]. Resultan interesantes los planteamientos de

132 John Hall e John Ikenberry, 1993. *El Estado*, Alianza Editorial, Madrid, y Michael Mann, 1997. *Las fuentes del Poder Social*, Alianza Editorial, Madrid.

133 Germán Colmenares, 1998. "La nación y la historia regional en los países andinos", en: *Varia. Selección de textos*. Obras Completas, Tercer Mundo editores, Universidad del Valle, Colciencias y Banco de la República, p.168.

134 Clara Inés García, 1994, "Territorios, regiones y acción colectiva", en: Renán Silva, editor, *Territorios, Regiones y Sociedades*, Universidad del Valle, CEREC, Bogotá, p. 127.

135 Clara Inés García, 1994. *Ibídem*, p.129

la autora en torno al Estado, que muestran que el papel de éste "se activa en el momento en que los conflictos regionales sobrepasan los significados de esas fronteras"[136].

Una situación similar encuentra García en el caso de Urabá, donde analiza la manera como los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas sirvieron, tal como sucedía en las guerras civiles del siglo XIX con el bipartidismo, como eje articulador de los distintos conflictos que cruzan aquella región. Insiste en que las luchas laborales y por la propiedad de la tierra no son, por sí mismos, suficientes para propiciar la constitución de una identidad regional y el reforzamiento del vínculo con el Estado. Como en el caso anterior, es la guerra la que vincula a los distintos actores sociales regionales, configura y proyecta la región e incita la participación de las instituciones del Estado en ella[137]. Por esa vía, dejan de ser tensiones locales, propios de un grupo particular, problemas como el tipo de poblamiento, la indefinición del estatuto jurídico de las tierras y la inexistencia de una política laboral, para recibir la atención del Estado. Incluso García insiste en que el desarrollo del conflicto armado termina por reforzar el papel del Estado, que es requerido, por primera vez, como mediador. Así pues, en los dos casos el conflicto armado no sólo incide en la configuración de una región y en su creciente proyección sobre el resto de la sociedad nacional, sino que incluso convierte a esa región en escenario de disputas que trascienden el carácter regional. Por la vía del conflicto armado se hacen visibles y se nacionalizan distintos conflictos regionales, al tiempo que las regiones se convierten en escenarios para el ejercicio y la definición de intereses del orden nacional[138].

Ahora bien, la idea de que el desarrollo del conflicto armado expresa y produce, al tiempo, un proceso de integración territorial queda clara con el seguimiento a los procesos de colonización. Legrand y otros autores han insistido en que es clara la vinculación de los problemas de las fronteras internas con el desarrollo de la guerra, así no haya acuerdo sobre el estatuto político de la frontera, o sea, sobre si es fuente o alternativa del conflicto[139]. No tanto o no solo por el hecho de que los actores armados se sitúen de manera privilegiada en esas regiones, sino porque desde allí perfilan una nueva identidad. En esa dirección se orienta Jaime Eduardo Jaramillo, para quien la acción guerrillera, aunque sus actores no se lo planteen así, puede estar expresando esfuerzos "de integración y asimilación de estas regiones (de frontera) y sus pobladores a nuestros mercados nacionales e internacionales, así como a las instituciones, la juridicidad y los servicios públicos"[140]. Por esa misma línea se encamina Legrand, quien establece que la guerrilla representa entre otras cosas, "un factor de integración de regiones distantes con el gobierno central"[141].

La ligazón entre colonización y conflicto armado produce unas formas de integración territorial no exenta de nuevas fracturas. Ni la integración territorial, ni la centralización política, ni mucho menos la constitución del monopolio de la violencia avanzan de manera lineal, sino que están permanentemente siendo discutidas y

136 Clara Inés García, 1996. *Urabá, región, actores armados y conflicto*, CEREC, Bogotá, p. 135.

137 Clara Inés García, 1996. *Ibídem*.

138 Clara Inés García, 1996. *Ibídem*.

139 Catherine Legrand, 1994."Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debates", en: *El agro y la cuestión social*, Ministerio de Agricultura, 80 años, Tercer Mundo Editores, Banco Ganadero, Caja Agraria, VECOL, Bogotá.

140 Catherine Legrand, 1994, *Ibídem*, p. 19.

141 Catherine Legrand, 1994. *Ibídem*, p. 20.

contestadas por diversos grupos de pobladores. Pero la integración territorial no se produce solamente por la vía de la guerrilla. Resulta revelador el pronunciamiento de Castaño "consideramos que lo que hacemos es ampliar las fronteras dentro del mismo margen de nuestro territorio"[142].

Es claro entonces que en algunas dinámicas del conflicto armado se juega la integración territorial y de otros grupos poblacionales al Estado. Esta dinámica nacional de conjunto contrasta con los problemas antes señalados de las "territorialidades bélicas" construidas por la acción de los actores armados de distinto signo, que tiene que ver más con la manera como ellos ocupan o se consolidan en un territorio. En cambio, la integración territorial tiene que ver con el papel que tal ocupación por parte de uno u otro actor tiene en la dinámica regional, y sus consecuencias para la relación entre la región y la nación, entre el actor específico y el conjunto de la sociedad. Las dinámicas de territorialización bélica e integración territorial están asociadas lógicamente al tipo de orden político local al que se enfrentan las guerrillas. Como hemos visto antes, las guerrillas nacen en municipios que también se están consolidando como tales y en donde ellas mismas participan en la definición de jerarquías sociales. Y su interés de expandirse hacia nuevos territorios en los años ochenta y noventa mostró que su participación en la vida local depende del tipo de municipio que enfrentan. Su incursión es percibida más o menos como una acción depredadora o militar según se trate de un municipio consolidado o de municipios cuya forma de integración se está deteriorando. En cualquier caso, la incursión de las guerrillas en esos distintos municipios se hace a través de la articulación con los conflictos propios de la sociedad local.

Este recorrido tanto por los problemas de la colonización como por los planteamientos de Uribe, Oquist, Pécaut y Roldán desembocan necesariamente en la consideración del proceso de construcción del Estado colombiano, tanto en su dimensión horizontal de integración gradual de territorios como en su dimensión vertical de integración de diferentes estratos sociales[143]. Por eso es necesario analizar y diferenciar tres procesos: a) el poblamiento gradual del territorio colombiano; b) la manera paulatina como se consolidan los mecanismos internos de regulación social por medio de la construcción de las correspondientes formas de estratificación, jerarquización y cohesión de los nuevos pobladores. Tales mecanismos son la base de nuevos poderes locales y regionales de hecho, cuya operación permite suplir la eventual carencia o el posible colapso del Estado central; c) el proceso de articulación de estos poderes de hecho con los partidos tradicionales y/o con los programas del Estado central. Estos tres procesos van a marcar definitivamente el estilo de articulación de los actores armados con las sociedades regionales, así como la relación de estas últimas con el Estado nación y el tipo de instituciones estatales que van a hacer presencia en ellas. Al mismo tiempo, esta relación y esta presencia del Estado explican el poder que los partidos políticos tradicionales han venido desempeñando en la historia nacional, como articuladores de la relación entre las regiones y el centro político y como instrumentos de la presencia estatal.

La existencia de las zonas en disputa, los cambios del control territorial, así como la inestabilidad de las lealtades que caracterizan las "territorialidades bélicas", estudiadas por María Teresa Uribe, unidas a las lecturas sobre la violencia colombiana a partir de conceptos como los de colapso parcial, precariedad o presencia diferenciada del Estado, remiten a la comprensión de la violencia política al problema de las relaciones entre Estado y sociedad en Colombia. Más puntualmente, a la manera como el Estado controla el territorio y regula la sociedad. Esta problemática nos obliga a la reflexión sobre las condiciones sociales, eco-

142 "Las autodefensas extrema derecha No por favor!", en: *El Colombiano*, 8 diciembre 1996. E.

143 Norbert Elias, 1994. "Los procesos de formación del estado y la construcción de la nación", en: *Revista Historia y Sociedad*, Universidad Nacional de Medellín.

nómicas y culturales que hicieron que los Estados occidentales construyeran el "monopolio estatal de la fuerza legítima". La reconstrucción de tal proceso permitirá sugerir algunos elementos para la comprensión de la historia política colombiana.